La búsqueda de personas desaparecidas: derecho humano de las víctimas y obligación internacional del Estado

The Search for Disappeared Persons: Human Right of the Victims and International Obligation of the State

Pietro SFERRAZZA TAIBI ¹

Resumen: En el marco del Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos se ha desarrollado una jurisprudencia y una práctica que permiten demostrar la vigencia de un derecho fundamental autónomo a la búsqueda de las personas desaparecidas y de una correlativa obligación internacional que debe ser cumplida por los Estados. Este artículo analizará el contenido de este derecho y obligación, a la luz de un modelo complementario de búsqueda de personas desaparecidas.

Palabras clave: Desaparición forzada; búsqueda de personas desaparecidas; Derecho internacional de los derechos humanos; Derecho internacional humanitario

Abstract: In the context of international humanitarian law and international human rights law there has been a developing of jurisprudence and practice that make possible to demonstrate the existence of an autonomous fundamental right to the search of disappeared persons, along with a corresponding international obligation that all States must abide. This article will analyze the context of such right and obligation, in light of a complementary model for the search of missing persons.

Keywords: Enforced Disappearance; Search for Missing Persons; International Human Rights Law; Humanitarian International Law

¹ Prof. de Derecho Internacional Público, Universidad Andrés Bello. Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid. Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Valparaíso. Este artículo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11180047 y por el Proyecto Jorge Millas 2018, DI 34-18-JM, UNAB. pietrosferraza@gmail.com. Un agradecimiento especial a la prof. ayudante Francisca Cárdenas Madrid por la revisión de las primeras versiones del trabajo.

1. Introducción

La desaparición forzada de personas es una de las más atroces violaciones a los derechos humanos, debido a las consecuencias que genera en perjuicio de la persona desaparecida, sus familiares y la sociedad en su conjunto. La desaparición forzada puede conceptualizarse como

el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley².

Por tanto, los elementos constitutivos del concepto de desaparición forzada son tres: 1) la privación de libertad; 2) la denegación de información; y 3) la exigencia de que sea cometida por un agente del Estado o un particular que actúa en conexión con el Estado. Como consecuencia de la configuración de estos elementos, la persona desaparecida queda sustraída de la protección de la ley, porque la falta de información sobre su situación imposibilita ejercer eficazmente las acciones judiciales para ubicarla y protegerla.

La desaparición es un crimen que se sigue cometiendo. Actualmente existen 45.811 casos de desapariciones bajo la revisión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI)³. Si bien se trata de un dato muy preocupante, solo representa el número de casos denunciados ante este organismo internacional, con lo cual la cifra oculta de personas desaparecidas a nivel mundial, probablemente, no puede ser calculada.

Pese al drama de esta situación, la desaparición forzada ha recibido una considerable atención por parte de la comunidad internacional, lo que se ha traducido en la entrada en vigor de tratados internacionales dedicados a este problema. En el sistema universal de derechos humanos está vigente la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas* (CIPPDF). Este tratado creó el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED). Entre otras atribuciones, puede conocer denuncias individuales, analizar informes periódicos de los Estados y emprender acciones urgentes para que los Estados tomen las medidas necesarias para localizar a una persona desaparecida⁴.

² Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), art. 2.

³ Consejo de Derechos Humanos (2020), párr. 5.

⁴ Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s.f.). "Comité contra las Desapariciones Forzadas", [Disponible en: <https://bit.ly/3puXovj>]. [Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2020].

Otro órgano de Naciones Unidas con un mandato específico sobre desapariciones es el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI). Su competencia tiene una naturaleza humanitaria, porque su función principal consiste en ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar su suerte y paradero. Con la adopción en 1992 de la *Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas* por la Asamblea General⁵, el GTDFI fue encomendado para seguir el progreso de los Estados sobre el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Declaración⁶.

En el sistema interamericano de derechos humanos también existe un tratado dedicado a las desapariciones: la *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas*. Las infracciones a esta Convención por parte de los Estados que la ratificaron pueden ser sometidas al sistema de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ambas entidades, a través de su jurisprudencia, han declarado la responsabilidad de los Estados en casos de desapariciones.

Por su parte, en el Derecho internacional humanitario existe una detallada regulación a nivel convencional y consuetudinario sobre las personas desaparecidas. Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha impulsado una serie de acciones de carácter humanitario sobre el problema.

Si bien es cierto que la desaparición forzada ha experimentado una evolución normativa favorable en el plano internacional, son muchos los desafíos pendientes. Uno de ellos consiste en perfeccionar la búsqueda de las personas que han desaparecido. Para la gran mayoría de los familiares es imprescindible que los restos de sus seres queridos puedan ser encontrados e identificados, porque solo a partir de ese momento podrán enfrentar la angustia generada por su ausencia. Los órganos internacionales de derechos humanos han estado promoviendo un modelo de búsqueda de carácter complementario, con una dimensión judicial focalizada en la investigación y sanción y otra dimensión administrativa o humanitaria encomendada a un órgano administrativo con un mandato para buscar, exhumar, identificar y restituir los restos de las personas desaparecidas. En Latinoamérica varios Estados han implementado o están implementando modelos de esta naturaleza, por ejemplo, Perú, Colombia y México.

⁵ Asamblea General de la ONU (1992).

⁶ Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s. f.). "Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias", [Disponible en: <https://bit.ly/3cpjIXg>]. [Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2020].

El presente artículo se pregunta si puede defenderse la vigencia de una obligación internacional de búsqueda de las personas desaparecidas que obliga a los Estados. De acuerdo con la hipótesis aparejada a este interrogante, en el marco del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos se ha desarrollado una jurisprudencia y una práctica internacional que permiten demostrar la vigencia de esta obligación y determinar su contenido mediante la identificación de deberes específicos que los Estados deben cumplir. A lo largo del trabajo, se explicarán y sistematizarán estas aportaciones prácticas y jurisprudenciales. Si bien son muchas las diferencias que existen entre estas dos ramas, ambas tienen por finalidad última proteger al ser humano, lo que explica la existencia de abundantes puntos de convergencia. El Derecho Internacional humanitario se ha encargado de regular una serie de deberes internacionales que los Estados deben cumplir respecto de las personas que desaparecen en el marco de un conflicto armado, mientras que el Derecho Internacional de los derechos humanos hace algo similar en relación con las víctimas de desaparición forzada en contextos autoritarios o en períodos de paz. Por ende, resulta metodológicamente coherente con los objetivos de este trabajo, analizar los estándares normativos sobre la búsqueda desarrollados por cada una de estas disciplinas⁷.

En cuanto a la metodología empleada para el desarrollo de la investigación, se ha realizado una búsqueda documental de las fuentes directas, especialmente sentencias y práctica internacional, con la finalidad de identificar el contenido de los deberes específicos derivados de la obligación general de búsqueda y la consolidación normativa de un derecho humano a la búsqueda.

La primera parte del texto explicará los modelos teóricos sobre la búsqueda de personas desaparecidas. Las secciones siguientes se dedicarán al análisis de la búsqueda como una obligación internacional de los Estados y un derecho humano de las víctimas. En ese orden de ideas, la segunda parte analizará las aportaciones realizadas por el derecho internacional humanitario (DIH). A su vez, la tercera parte analizará el tratamiento de la búsqueda por el Derecho internacional de los derechos humanos. El artículo finalizará con algunas conclusiones.

⁷ Evidentemente, este trabajo no tiene por objeto analizar las interesantes discusiones sobre la interconexión entre Derecho internacional humanitario y Derecho internacional de los derechos humanos. Sobre el punto, a modo de ejemplo, puede consultarse a Sivakumaran (2014), pp. 503-520; Milanovic (2014), pp. 1-38; Jinks (2015), pp. 656-674; Sassòli (2020), pp. 381-402.

2. Modelos teóricos de búsqueda de personas desaparecidas

Cuando se produce una desaparición forzada,

[l]a imposibilidad de hacer duelo por la pérdida de un ser querido, la situación de indefinición jurídica que afecta a los familiares, la sensación de ultraje e incluso de profanación que estos sienten al no tener noticia de los restos de sus parientes, todo ello configura una situación de injusticia que profundiza el dolor de la pérdida en sí misma. Atender a esa realidad aparece, así, como un deber de toda política de justicia sobre desapariciones⁸.

En base a esta reflexión, es plausible asumir que la búsqueda de las personas desaparecidas es un deber que obliga al Estado.

La investigación de las desapariciones forzadas puede responder al cumplimiento de diversas finalidades. Por un lado, el objetivo estrictamente jurídico obliga a la recopilación de las pruebas necesarias para perseguir la responsabilidad de los perpetradores. Por otro lado, el hallazgo, recuperación, identificación y restitución de los restos de las víctimas, satisface un fin que suele tildarse de “humanitario”. Asimismo, la satisfacción de los objetivos anteriores debería incidir favorablemente en la reconstrucción de la verdad y podría contribuir para la reparación⁹. Sin embargo, en la práctica no siempre es fácil diferenciar qué finalidades se persiguen y es frecuente que estos objetivos se entrelacen, se solapen y se tensionen entre sí¹⁰. La búsqueda de las personas desaparecidas debería encauzarse teniendo en consideración la necesidad de satisfacer todos esos fines, pero también es necesario tener en cuenta que los vaivenes políticos de cada contexto particular pueden obstaculizar el logro de alguno de ellos¹¹.

A nivel nacional puede ocurrir que la búsqueda se ejecute mediante la investigación judicial o que se encomiende a un órgano administrativo. Por tanto, es posible diferenciar dos modelos teóricos de búsqueda: el modelo judicial y el administrativo. La finalidad del primero consiste en calificar si una persona imputada por el delito de desaparición forzada es jurídicamente responsable en base a las pruebas rendidas conforme las ritualidades del proceso judicial. En

⁸ Reátegui et al. (2012), p. 10.

⁹ Tuller (2015), pp. 86-87; Fowler y Thompson (2017), pp. 116-117. Cfr. Garibian (2013), pp. 31-32: “En esta configuración totalmente singular de una violencia de masa estatal —construida sobre la base del borrado sistemático de los cuerpos de las víctimas—, proponemos aprehender el cuerpo desaparecido como objeto de una triple apuesta: el establecimiento de los hechos para sacar a la luz, (re)construir y conocer el relato de lo que sucedió, tras ello, la revelación del crimen y el juicio a los responsables y, finalmente, el cese del crimen y el acceso al duelo. Se tratará entonces de pensar el cuerpo desaparecido/ausente no “en negativo” (relativo a lo que impide), sino “en positivo” (relativo a lo que jurídicamente permite), esto es: pensarlo como generador de derechos y obligaciones”.

¹⁰ Tuller (2015), pp. 86-87; Salado Puerto y Tuller (2017), pp. 224-225, 226-227; Robins (2014), pp. 48-49; Stover y Shigekane (2002), p. 846; Doretti y Fondebrider (2001), pp. 143-144.

¹¹ Garibian et al. (2017), p. 17: “La búsqueda de los cuerpos siempre se lleva a cabo dentro de las limitaciones que quedan por negociar y los conflictos que quedan por resolver”.

esa lógica, la búsqueda de la persona desaparecida suele ser un objetivo accesorio a la persecución de la responsabilidad jurídica¹².

Por su parte, la finalidad del modelo administrativo consiste en buscar a la persona desaparecida con vida o, en su defecto, intentar el hallazgo, exhumación, identificación y restitución de sus restos¹³. En este modelo, la búsqueda se encarga a un órgano administrativo con un mandato específicamente acotado para ello. Entonces, parece ser que cada uno de estos modelos atiende necesidades distintas: mientras el judicial persigue la justicia, el administrativo se centra en el hallazgo de la persona desaparecida. De ese modo, Collins explica que si se grafica la respuesta estatal ante la desaparición forzada como una cadena de etapas, cada uno de estos modelos parece desempeñar sus funciones solo en alguna de las fases de la cadena: mientras el modelo judicial se centra en la investigación de los hechos desde la privación de libertad de la persona hasta que se perdió la información sobre su suerte y paradero, el modelo administrativo se focaliza en los hechos acontecidos desde la pérdida de información¹⁴.

El modelo administrativo también suele denominarse modelo humanitario. Esta terminología se explicaría por la relación que media entre la búsqueda de las personas desaparecidas y la “acción humanitaria”¹⁵. Esta noción engloba una gama de mecanismos que han sido impulsados a nivel internacional principalmente por el CICR y que sobre la base de los principios como la neutralidad, imparcialidad, independencia, universalismo e independencia¹⁶, tienen por finalidad aliviar el sufrimiento de las víctimas en situaciones de conflicto armado o catástrofes. Ejemplos de “acciones humanitarias” son, entre otras, la gestión de cadáveres, su exhumación e identificación, la búsqueda de las personas desaparecidas y el cuidado de las personas sobrevivientes¹⁷. De acuerdo con la lógica humanitaria, la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada es una actividad destinada a aliviar el sufrimiento de los familiares, lo que justificaría la necesidad de su ejecución con independencia de la tramitación de los procesos judiciales.

Sin embargo, esta caracterización de la búsqueda como una acción humanitaria es objeto de desacuerdo en la literatura interdisciplinaria sobre el tópico, porque se ha cuestionado que

¹² CICR (2003 b), p. 95; Crettol et al. (2017), p. 597; Nesiah (2002), p. 825; Pearlman (2008), pp. 1, 6.

¹³ Rosenblat (2015), p. 181.

¹⁴ Collins (2016), pp. 14-15.

¹⁵ Para una completa explicación sobre el contenido y la evolución del concepto de “humanitarismo” (*humanitarianism*), véase Barnett y Weiss (2008), pp. 1-49.

¹⁶ Barnett y Weiss (2008), p. 3.

¹⁷ Corder y Tidball-Binz (2017), p. 65.

exista una diferencia tajante entre acciones humanitarias y acciones judiciales¹⁸. Esta tensión surge porque uno de los dilemas inherentes a la búsqueda consiste en definir cuál es su finalidad central, porque en ciertos casos se prioriza la recuperación e identificación de los restos, mientras que en otros se privilegia la recolección de pruebas para demostrar la culpabilidad de los perpetradores.

El distanciamiento entre la justicia perseguida en sede judicial y la acción humanitaria implementada en sede administrativa estaría justificada por una supuesta neutralidad e imparcialidad de esta última. De hecho, el mandato del CICR se inspira en esta diferenciación. Sin embargo, otras organizaciones —como el Equipo Argentino de Antropología Forense— se resisten el *ethos* de la neutralidad e intentan contribuir con la búsqueda sin renunciar a la justicia¹⁹.

Muy probablemente existe una conexión indisoluble entre el hallazgo e identificación de los restos por un lado y la condena judicial de los autores de la desaparición por otro. Es posible que el enfoque dicotómico que enfrenta lo humanitario con lo judicial sea engañoso. Si bien cada contexto nacional o local tiene sus peculiaridades, puede que la búsqueda de las personas desaparecidas deba tender a satisfacer ambos tipos de necesidades²⁰. De hecho, no puede descartarse de plano la condena de los autores, porque además de fortalecer los pilares del Estado de Derecho, cumple con una finalidad reparadora para los familiares. En ese sentido, la justicia también sería “humanitaria” y, a su vez, el hallazgo e identificación de las víctimas también serían “justas”. La implementación de un modelo exclusivamente administrativo que reemplace los juicios generaría una tensión insostenible en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de investigación y sanción que derivan de los sistemas internacionales de derechos humanos, dando lugar a hipótesis de impunidad.

Para superar este enfoque binario, se ha propuesto impulsar un modelo complementario en que ambas dimensiones —la judicial y la administrativa— puedan coexistir y retroalimentarse mutuamente. De ese modo, la persecución de las responsabilidades jurídicas quedaría radicada en los órganos jurisdiccionales, mientras que la búsqueda de las personas desaparecidas

¹⁸ Rosenblat (2019), p. 76.

¹⁹ Doretti y Burrell (2007), p. 48. Esta tensión no solo se reproduce en el ámbito jurídico, sino también en las ciencias forenses. Por ejemplo, en el ámbito de la arqueología forense, solo existe una oportunidad para realizar una excavación y documentar la evidencia, con lo cual la priorización de ciertos fines sobre otros puede generar un enrevesado dilema ético en los y las profesionales de la disciplina. De hecho, se ha señalado que existe un deber ético de recopilar toda la información disponible en una diligencia de esa índole, con independencia de los fines que se persigue en el caso concreto. Sobre estas tensiones, vid. Tuller (2015), pp. 94-99.

²⁰ Stover y Shigekane (2002), p. 847.

encarnaría el objetivo central del mandato de un órgano administrativo. En todo modelo complementario es imprescindible que la persecución penal y la búsqueda no se obstaculicen entre sí, sino que interactúen en beneficio mutuo, siendo necesario protocolizar la relación entre ambos tipos de órganos de acuerdo con las peculiaridades del contexto local.

3. La búsqueda de personas desaparecidas de acuerdo con el Derecho internacional humanitario

Uno de los organismos internacionales que ha impulsado la necesidad de que se implemente una política de búsqueda por parte de los Estados ha sido el CICR. Los conflictos armados representan un contexto en que las personas enfrentan un elevado riesgo de desaparecer. Por esta razón, la primera parte de esta sección estará dedicada a explicar la diferencia entre las nociones de desaparición forzada y persona desaparecida. Se trata de una explicación importante, porque la mayoría de los deberes internacionales que los instrumentos convencionales del DIH imponen a los Estados tienen aplicación respecto de las personas desaparecidas. Estos deberes deben ser cumplidos por los Estados beligerantes y, en algunos casos, por los grupos armados no estatales que participan de un conflicto armado y una de sus más interesantes aportaciones radica en trazar estándares para evitar la pérdida de información de las personas protegidas. La obligatoriedad de estos deberes es una prueba de la vigencia de una obligación internacional general de búsqueda y es esta la razón por la cual la segunda sección de este acápite se dedicará a un breve repaso de estas obligaciones. También se hará referencia a algunos órganos relevantes vinculados con la búsqueda de las personas desaparecidas y se concluirá con las aportaciones del CICR con respecto a este problema.

3.1. EL CONCEPTO DE PERSONA DESAPARECIDA

El Derecho internacional humanitario ha regulado distintas materias que tienen relación con la búsqueda de personas desaparecidas. En primer lugar, cabe aclarar que la noción de “personas desaparecidas” del DIH es distinta a la de desaparición forzada. Las personas desaparecidas son aquellas respecto de las que se ha perdido toda información sobre su estado y paradero por causa de un conflicto armado²¹. Es posible que la causa de la pérdida de información sea la desaparición forzada, pero se trata de conceptos distintos. La noción de personas desaparecidas es más amplia, porque incluye cualquier situación en que se pierda información sobre una

²¹ CICR (2009 a), p. 1; CICR (2009 d), p. 13; Martin (2002), p. 724; Zellweger-Monin (2007), p. 99.

persona en el marco de un conflicto armado. Habiéndose aclarado esta cuestión conceptual, se revisarán brevemente las obligaciones internacionales que el DIH impone a los Estados y que están relacionadas directa o indirectamente con la búsqueda de personas desaparecidas.

3.2. LOS DEBERES INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA BÚSQUEDA EN EL CONTEXTO DE UN CONFLICTO ARMADO

Para comenzar, el art. 32 del PICG consagra uno de los derechos más importantes a favor de los familiares de las personas desaparecidas: el derecho a la verdad²². Esta es la primera disposición que consagró este derecho a nivel convencional, sirviendo de inspiración para su desarrollo normativo posterior en otros tratados internacionales²³.

El DIH consagra otras obligaciones internacionales impuestas a los Estados que se relacionan con la búsqueda de las personas desaparecidas. Así, el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (PICG) obliga a las Partes beligerantes a buscar a las personas cuya desaparición viene señalada por la parte contraria²⁴. Asimismo, las Partes beligerantes deben proceder a la contestación de las solicitudes de información formuladas por los familiares de las personas desaparecidas²⁵. También puede destacarse una detallada regulación sobre el registro de datos de personas protegidas y sobre los procedimientos de transmisión de información a su respecto²⁶.

El DIH también tiene una densa regulación sobre los deberes de los beligerantes en relación con las personas fallecidas. Destacan el deber de buscar y recoger a los muertos para evitar que sean despojados y el deber de proceder a su identificación²⁷. También se consagra un principio general de trato respetuoso a los muertos²⁸. En base a este principio, se prohíben la mutilación²⁹

²² Kleffner (2008), p. 337.

²³ Gaggioli (2018), p. 192.

²⁴ *Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales* (PAI) (1977), art. 33; Henckaerts y Doswald Beck (2009), Rule 117, pp. 421-ss., señalando que se trata de una regla consuetudinaria aplicable solo a conflictos armados internacionales. Cfr. Sassòli y Tougas (2002), pp. 730-731.

²⁵ *III Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra* (CGIII) (1949), art. 122.6; *IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra* (CGIV) (1949), art. 137.1.

²⁶ *I Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña* (CGI) (1949), art. 16; *II Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar* (CGII) (1949), art. 19; CGIII, arts. 70, 122.4; CGIV, arts. 106, 138; PAI, art. 33.2.a). Cfr. Kleffner (2008), pp. 336-337 y 339.

²⁷ CGI, arts. 15 a 17; CGII, arts. 18 a 20; CGIV, art. 16; PAI, art. 33.4; Henckaerts y Doswald Beck (2009), Rule 112, pp. 406-ss. Cfr. Kleffner (2008), pp. 337-338; Gaggioli (2018), pp. 186-187, para quien estas obligaciones son de medio y no de resultado, con lo cual los Estados deben adoptar las medidas razonables en relación con sus capacidades en cada caso concreto.

²⁸ CGI, art. 17; CGIV, art. 130; PAI, arts. 33.4, 34; Henckaerts y Doswald Beck (2009), Rule 115, pp. 414-ss. Cfr. Kleffner (2008), p. 338, refiriéndose a los estándares sobre funerales.

²⁹ Henckaerts y Doswald Beck (2009), Rule 113, pp. 409-ss. Cfr. Gaggioli (2018), p. 187.

y el despojo de los cadáveres³⁰. Incluso, se regula con minuciosidad la devolución de los efectos personales³¹.

Si bien no se establece expresamente un deber de devolución de los restos³², el PAI sugiere que los beligerantes deberían celebrar algún tipo de acuerdo para enfrentar esta problemática y establece un procedimiento a seguir en caso de que tales acuerdos no se celebren³³. Sin embargo, respecto de los conflictos armados no internacionales no existe ninguna disposición sobre esta materia.

Hay varios deberes sobre la manera en que deben enterrarse los cadáveres³⁴. En principio, deberían ser depositados en tumbas o fosas y la cremación solo podría llevarse a cabo de manera excepcional, siempre que esté justificada en motivaciones higiénicas o religiosas³⁵. Se proscriben los entierros en fosas comunes, estableciéndose el deber de realizar entierros de manera individual³⁶. En cuanto al sitio o lugar de entierro, se regulan salvaguardas para asegurar su identificación³⁷.

En materia de identificación de los restos humanos, los CG obligan a las partes beligerantes a identificar las personas muertas de la parte adversaria que estén en su poder³⁸. Las obligaciones internacionales en este ámbito son de medio y no de resultado y solo se regulan a propósito de los conflictos armados internacionales³⁹. Sin embargo, debe destacarse un incipiente desarrollo en los métodos de identificación de los restos de personas fallecidas en contextos de crímenes de masa. Este estado de cosas podría incidir positivamente en la generación de normas consuetudinarias más exigentes sobre el deber de identificación, especialmente, si se consideran las buenas prácticas que se han desarrollado a nivel internacional sobre este tema.

³⁰ Henckaerts y Doswald Beck (2009), Rule 113, pp. 409-ss. Cfr. Gaggioli (2018), pp. 187-188; Kleffner (2008), pp. 338.

³¹ CGIII, art. 122.8. Cfr. Gaggioli (2018), p. 187. Sobre la importancia de los efectos personales para la identificación de las personas desaparecidas, vid. Fowler y Thompson (2017), p. 118.

³² Sin embargo, Sassòli y Tougas (2002), p. 731, defienden la existencia de un derecho a la devolución de los restos en el DIH.

³³ PAI, art. 34; Henckaerts y Doswald Beck (2009), Rule 114, pp. 411-ss. Cfr. CGIV, art. 130, sobre la conservación y devolución de las cenizas de los restos.

³⁴ CGI, art. 17; CGII, art. 20; CGIII, art. 120; CGIV, art. 130; PAI, art. 34; Henckaerts y Doswald Beck (2009), Rule 115, pp. 414-ss. y Rule 116, pp. 417-ss.

³⁵ Kleffner (2008), p. 338.

³⁶ CGIV, art. 130. Cfr. Fowler y Thompson (2017), pp. 120-121, señalando que las fosas comunes pueden estar asociadas a la violencia de masa. Klinkner (2017), propone la creación de estándares internacionales para la protección de los sitios de entierro masivos. Sobre los problemas inherentes a la conceptualización de las fosas comunes, vid. Jugo y Wastell (2017), pp. 137-141, 144.

³⁷ Kleffner (2008), p. 338.

³⁸ Cfr. CGI, art. 16; CGII, arts. 19, 20; CGIII, arts. 120 a 122; CGIV, arts. 129, 130; PAI, art. 34; Henckaerts y Doswald (2009), Rule 116, pp. 417-ss.; Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), párr. 14.

³⁹ Gaggioli (2018), p. 191; Kleffner (2008), p. 338; Sassòli y Tougas (2002), p. 731.

3.3. LOS ÓRGANOS CON COMPETENCIAS PARA LA BÚSQUEDA

Otro grupo de obligaciones del DIH obligan a las Partes en conflicto a la implementación de una serie de órganos cuyo mandato se relaciona con la búsqueda de personas desaparecidas. Así, deben crear un Servicio Oficial de Tumbas, que puede ejercer competencias sobre la práctica de exhumaciones, la identificación de los cadáveres y su eventual traslado al país de origen⁴⁰.

Por otro lado, el CGIII y el CGIV se refieren al deber de los Estados beligerantes de establecer un Agencia de Información⁴¹, la cual detenta atribuciones para centralizar, recopilar y transmitir información sobre las personas protegidas⁴².

Asimismo, los CG requieren que en un Estado neutral se implemente una Agencia Central de Información para los prisioneros de guerra y para la protección de los civiles⁴³. La función de este órgano consiste en centralizar la información sobre los prisioneros de guerra, civiles internados y personas desaparecidas y transmitirla a sus Estados de origen y familiares⁴⁴. Si bien los CG prescriben que su creación es un deber de los Estados neutrales, también disponen que el CICR puede proponer la organización de la Agencia⁴⁵. Así las cosas, el CICR creó en 1960 la denominada “Agencia Central de Búsqueda” (*Central Tracing Agency*) como una división del CICR en Ginebra⁴⁶. Se trata de una entidad que tiene por objeto recopilar toda información que pueda obtenerse mediante canales oficiales o privados sobre personas protegidas, a fin de transmitirla a su país de origen o de residencia o al Estado de los cuales dependen, excepto cuando dicha transmisión pueda ser perjudicial para las personas a quienes concierne la información o para sus familiares⁴⁷. Con el transcurso del tiempo, su mandato se ha ido diversificando, dado que ha cumplido un papel interesante en situaciones de violencia distintas a los conflictos armados, por ejemplo, en casos de desastres naturales⁴⁸. En relación con las personas desaparecidas, la Agencia se preocupa de recopilar información y restablecer el contacto con los familiares⁴⁹.

⁴⁰ CGI, art. 17; GCIII, art. 120. Cfr. Gaggioli (2018), p. 193; Kleffner (2008), p. 338.

⁴¹ CGIII, art. 122; CGIV, art. 136.

⁴² CGI, arts. 16, 17; CGIII, art. 122; GCIII, 120; CGIII, art. 122; CGIV, art. 130; CGIV, arts. 136, 137, 138.

⁴³ CGIII, art. 123; CGIV, art. 140.

⁴⁴ Gaggioli (2018), p. 194.

⁴⁵ CGIII, art. 123; CGIV, art. 140.

⁴⁶ Gaggioli (2018), p. 194; CICR (2010).

⁴⁷ CICR, (s. f.).

⁴⁸ CICR (2010); Gaggioli (2018), p. 194.

⁴⁹ Capellà i Roig (2006), pp. 279-281; Gaggioli (2018), p. 194; Londoño y Ortiz (2017), p. 552; Sassòli y Tougas (2002), pp. 733-736, pero criticando la falta de objetividad que se presenta en algunos casos para decidir qué solicitudes de información procesar.

A modo de recapitulación, el cumplimiento de estos deberes puede contribuir para evitar que se pierda información sobre el paradero de las personas protegidas o de los restos de las personas fallecidas y para que estos sean devueltos a sus familiares⁵⁰. El repaso de esta normativa permite sostener que el DIH prescribe una serie de deberes que dotarían de contenido una obligación general de búsqueda de las personas desaparecidas en el marco de un conflicto armado.

3.4. EL PAPEL DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

El CICR ha sido uno de los organismos internacionales que ha incidido en la difusión e implementación de una serie de buenas prácticas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. Una de las tareas más relevantes que ha desempeñado ha sido la de sistematizar una serie de recomendaciones destinadas a prevenir la desaparición de personas, implementar políticas de búsqueda y atender las necesidades de las víctimas. Una primera actuación en ese sentido fue la convocatoria, en el año 2002, de una conferencia internacional denominada *Las personas desaparecidas: Acción para resolver el problema de las personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado o de violencia interna y para ayudar a sus familiares*. A raíz de esta instancia, se elaboró un conjunto de estándares relacionados con la prevención de las desapariciones, la búsqueda, el papel de las ciencias forenses y el tratamiento de las necesidades de los familiares⁵¹.

Asimismo, en la 28ª Conferencia Internacional del CICR se incluyó el problema de las personas desaparecidas en una *Declaración y Agenda de Acción Humanitaria*. Este instrumento contiene varias recomendaciones sobre las acciones que los Estados deberían implementar para prevenir las desapariciones, recopilar y organizar la información, gestionar los restos y apoyar a los familiares⁵².

En el año 2008, el CICR elaboró un conjunto de principios guía para parlamentarios, reunidos en una propuesta de ley modelo sobre personas desaparecidas⁵³. Estos principios clarifican algunos estándares mínimos que deberían ser aplicados de manera holística por los Estados en atención de las peculiaridades de cada contexto local. Se trata de un insumo interesante, dado que una política de búsqueda debe contar con un sustrato normativo adecuado. Si bien el tipo de norma jurídica en que debería plasmarse una política de búsqueda va a depender de cada

⁵⁰ Gaggioli (2018), p. 189; Sassòli y Tougas (2002), p. 731.

⁵¹ CICR (2003 b).

⁵² CICR (2003 a).

⁵³ CICR (2009 d).

contexto local, la ley es la norma jurídica que asegura una mayor legitimidad democrática, con lo cual los órganos legislativos deberían desempeñar un papel protagónico en el diseño de estas políticas.

El CICR también ha elaborado estándares sobre cuestiones técnicas relacionadas con las ciencias forenses y los procesos de exhumación, identificación y atención de las víctimas. Entre los documentos más relevantes se puede citar una guía práctica sobre acompañamiento de familiares de personas desaparecidas⁵⁴, un instrumento sobre la gestión de cadáveres en situaciones de desastre⁵⁵ y un conjunto de buenas prácticas sobre métodos de identificación de restos humanos⁵⁶.

Todas estas acciones de promoción implementadas por el CICR demuestran que la búsqueda de las personas desaparecidas es una de sus preocupaciones más relevantes y dan cuenta de la existencia de una práctica internacional que sirve de sustento a la vigencia de un deber internacional de buscar a las personas desaparecidas.

4. La búsqueda de personas desaparecidas de acuerdo con el Derecho internacional de los derechos humanos

En este acápite se dará cuenta del desarrollo que ha experimentado la obligación internacional de búsqueda en el Derecho internacional de los derechos humanos. En una primera parte, se hará referencia a las principales normas internacionales que se han referido directa o indirectamente al tema de la búsqueda. La sección concluirá con una sistematización de la jurisprudencia y práctica internacional que se ha desarrollado sobre esta obligación.

4.1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE LA OBLIGACIÓN DE BÚSQUEDA

El problema de la búsqueda de las personas desaparecidas ha recibido una especial atención en la evolución del Derecho internacional de los derechos humanos. En este apartado se identificará la regulación convencional y los instrumentos del *soft law* que se han referido expresamente al deber de búsqueda.

⁵⁴ CICR (2014).

⁵⁵ CICR (2009c).

⁵⁶ CICR (2009e).

En cuanto a los tratados internacionales, la CIPPDF ha establecido un deber expreso en el art. 24.3 en los siguientes términos: “Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”. Este tratado reitera la obligatoriedad de la búsqueda a propósito del deber de cooperación internacional, estableciendo en el art. 15 que “Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio posible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos”. Por tanto, todos los Estados partes de esta convención están jurídicamente obligados a la implementación de una política pública a nivel interno y de cooperar con el resto de Estados en la búsqueda.

Además de las normas convencionales, algunos relevantes instrumentos internacionales de *soft law* establecen recomendaciones y sistematizan buenas prácticas sobre la búsqueda de las personas desaparecidas. Entre tales instrumentos destacan las resoluciones dictadas por la Asamblea General de la OEA (AG OEA) y a los Principios Rectores elaborados por el CED.

En el sistema interamericano, en efecto, desde el año 2005 la AG OEA ha venido dictando una serie de resoluciones para impulsar a los Estados miembros de la organización regional al cumplimiento de diversos deberes internacionales relacionados con la búsqueda de las personas desaparecidas. Estas resoluciones han recomendado esclarecer el paradero y la suerte de las personas desaparecidas, tomando en consideración la posibilidad de establecer modelos complementarios que combinen la búsqueda por la vía administrativa con la investigación y sanción judicial⁵⁷.

Además de esta recomendación general, la AG OEA ha realizado recomendaciones más específicas sobre la necesidad de preservar los restos de las personas desaparecidas no reclamados, salvaguardando la posibilidad de identificarlos en el futuro⁵⁸. También ha hecho hincapié en el derecho de las víctimas a participar y ser representadas en los procesos de búsqueda⁵⁹.

⁵⁷ AG OEA (2018), párr. vi.1.c; AG OEA (2016), párr. xi.1.c; AG OEA (2014), párrs. 1, 10; AG OEA (2013), párr. 12; AG OEA (2012), párrs. 1,11; AG OEA (2011), párrs. 1, 10; AG OEA (2010), párrs. 6, 12, 17; AG OEA (2009), párrs. 6, 12; AG OEA (2008), párrs. 5,11; AG OEA (2007), párr. 5; AG OEA (2005), párrs. 2, 9.

⁵⁸ AG OEA (2018), párr. vi.1.e.

⁵⁹ AG OEA (2018), párr. vi.1.f; AG OEA (2016), párr. xi.1.e; AG OEA (2018), párrs. 4, 7; AG OEA (2013), párr. 4; AG OEA (2007), párr. 6.

La Asamblea General ha estado consciente de la necesidad de perfeccionar y adecuar las competencias técnicas de los órganos nacionales y los profesionales de las ciencias forenses dedicados a las tareas de recopilación y análisis de los restos y evidencias⁶⁰. En este orden de ideas, ha recomendado que la información sobre las personas desaparecidas sea manejada adecuadamente mediante la creación de bancos de datos centralizados⁶¹.

En cuanto al sistema universal de derechos humanos, en abril de 2019 el CED aprobó los *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas*⁶². La aprobación de este instrumento representa un hito histórico en la evolución de la reflexión interdisciplinaria sobre la desaparición forzada y su consulta es obligada para todo Estado que pretenda tomarse en serio la implementación de una política pública de búsqueda. Mediante este instrumento el CED ha apostado por promover un modelo complementario de búsqueda⁶³.

4.2. LA JURISPRUDENCIA Y PRÁCTICA INTERNACIONAL SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA BÚSQUEDA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

La obligación internacional y el derecho fundamental a la búsqueda ha sido abordada por la jurisprudencia y la práctica de importantes tribunales y órganos internacionales de derechos humanos. El objetivo de este apartado consiste en dar cuenta de las principales aportaciones de estas entidades, con el objeto de identificar cómo se ha ido perfilando el contenido de esta obligación y derecho. Esta jurisprudencia y práctica internacional también ha promovido la implementación de un modelo complementario de búsqueda como política pública por parte de los Estados. Para el desarrollo de estas dos temáticas, se centrará la mirada en las aportaciones del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los derechos humanos, para cuyo efecto se ha revisado la jurisprudencia de la Corte IDH respecto del primero y la práctica del GTDFI del CED para el segundo.

4.2.1. La búsqueda como deber internacional del Estado

La obligación de buscar a las personas desaparecidas es una obligación internacional que debe ser cumplida por el Estado. Una de las consecuencias más relevantes que se deriva de esta afirmación es que el deber de búsqueda no puede sujetarse a la iniciativa de los familiares u otras

⁶⁰ AG OEA (2018), párr. vi.1.g; AG OEA (2016), párr. xi.1.f; AG OEA (2014), párrs. 2.d, 8; AG OEA (2013), párrs. 7, 10; AG OEA (2012), párrs. 2, 6, 9; AG OEA (2011), párrs. 2, 7; AG OEA (2010), párrs. 9, 10; AG OEA (2009), párrs. 9, 10; AG OEA (2008), párrs. 8, 9; AG OEA (2007), párrs. 8, 9; AG OEA (2006), párr. 6.

⁶¹ AG OEA (2018), párr. vi.1.h; AG OEA (2016), párr. xi.1.g; AG OEA (2014), párrs. 7, 8; AG OEA (2013), párr. 7; AG OEA (2012), párr. 7; AG OEA (2010), párr. 5; AG OEA (2009), párrs. 5; AG OEA (2008), párr. 4; AG OEA (2006), párr. 3.

⁶² Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019)

⁶³ Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principios 3.1, 7.5, 11.7.b, 13.

personas. Es evidente que los familiares, las personas cercanas a las personas desaparecidas y las personas defensoras de derechos humanos realizan una imprescindible labor en la búsqueda, pero con independencia de ello es el Estado el sujeto internacionalmente obligado a su cumplimiento⁶⁴.

Como contrapartida, la persona desaparecida es titular de un derecho humano a ser buscada. Asimismo, los familiares y otras personas cercanas a la persona desaparecida también son titulares de un derecho fundamental a que el Estado busque a sus seres queridos desaparecidos. Este derecho humano a la búsqueda mantiene una relación de interdependencia con el derecho de toda persona a no ser sometido a desaparición forzada, derecho que sido consagrado expresamente en el art. 1.1 de la CIPPDF y que ha adquirido el rango de norma de *ius cogens*⁶⁵. Además, cabe recordar que la muerte no es un elemento conceptual de la desaparición forzada, dado que la persona desaparecida debe presumirse viva a menos que se encuentren e identifiquen sus restos⁶⁶. Finalmente, el derecho fundamental a la búsqueda mantiene una vinculación con el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación. Estas relaciones serán abordadas a continuación.

4.2.1.1. BÚSQUEDA, DERECHO A LA JUSTICIA Y DEBER DE INVESTIGACIÓN

Para la jurisprudencia interamericana, el derecho de los familiares de acceder a la justicia permite exigir al Estado que determine la suerte y paradero de las personas desaparecidas⁶⁷. En algunas sentencias, la Corte IDH ha señalado que la investigación penal no es incompatible con la adopción de otros mecanismos que tengan por objeto localizar a las personas desaparecidas⁶⁸. Incluso, ha instado a los Estados a implementar una estrategia de búsqueda paralela y complementaria a los procesos judiciales⁶⁹.

⁶⁴ Dulitzky y Anayanssi (2019), p. 15. En cuanto a la jurisprudencia y práctica internacional, cfr. Corte IDH, *19 Comerciantes Vs. Colombia*, Serie C Nro. 109, de 5 de julio de 2004, párrs. 270-271; Corte IDH, *Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 328, de 30 de noviembre de 2016, párr. 294; Corte IDH, *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 92, de 27 de febrero de 2002, párr. 117; Corte IDH, *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, de 16 de noviembre de 2009, párr. 18; CED (2016), párr. 26; CED (2014), párr. 28; Consejo de Derechos Humanos (2013 b), párr. 16; Consejo de Derechos Humanos (2007 b), párr. 70.

⁶⁵ Cançado Trindade (2012), pp. 532-536; Sarkin (2012), pp. 564-570 y 574-576.

⁶⁶ Cfr. Rodley y Pollard (2009), p. 333. Cfr. Corte IDH, *Durand y Ugarte Vs. Perú*, Serie C Nro. 68, de 16 de agosto de 2000, párrs. 59, 124, 128, 130 y 143.

⁶⁷ Corte IDH, *Anzualdo Castro vs. Perú*, Serie C Nro. 202, de 22 de septiembre de 2009, párr. 124; Corte IDH, *Garrido y Baigorria Vs. Argentina*, de 30 de agosto de 2017, párr. 29; Corte IDH, *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*, Serie C Nro. 287, de 14 de noviembre de 2014, párr. 486.

⁶⁸ Corte IDH, *Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú*, Serie C Nro. 299, de 1 de septiembre de 2015, párr. 317; Corte IDH, *Gómez Palomino Vs. Perú*, de 5 de julio de 2011, párr. 15.

⁶⁹ Corte IDH, *Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú*, Serie C Nro. 299, de 1 de septiembre de 2015, párr. 318; Corte IDH, *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 335.

Para satisfacer el derecho a la justicia, el Estado tiene el deber de realizar una investigación cuando se produzca una violación grave a los derechos humanos como una desaparición forzada. La Corte IDH ha reconocido que la investigación de este crimen, no solo tiene por objeto contribuir al esclarecimiento de los hechos para la persecución de los responsables, sino también promover la identificación de las personas desaparecidas⁷⁰ y ha señalado que la búsqueda puede realizarse en el marco de la investigación penal o mediante un procedimiento administrativo⁷¹, lo que permite suponer que la búsqueda y la investigación penal pueden complementarse entre sí. El tribunal interamericano ha indicado que los restos de una persona fallecida y el lugar en el cual sean encontrados pueden proporcionar información valiosa sobre lo sucedido y sobre los autores de las violaciones y la institución a la que pertenecían⁷².

Si bien existe una relación de interdependencia entre la obligación de búsqueda y el deber de investigación, se trata de deberes diferentes que no deben ser confundidos⁷³. De hecho, es posible que se encuentre a la persona desaparecida sin que se haya condenado a los responsables, o viceversa, que se haya condenado a los responsables sin que se hayan hallado los restos de las víctimas. En ambas hipótesis, el Estado tiene pendiente el cumplimiento de un deber: en la primera debe llevar a cabo la investigación y la sanción, mientras que en la segunda debe realizar la búsqueda.

El deber de búsqueda existe hasta que se determine el paradero y la suerte de la persona desaparecida, identificándose de manera fidedigna sus restos⁷⁴. Al respecto, es interesante hacer referencia al caso *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. En este caso, si bien las autoridades estatales reconocieron desde 1983 la existencia de un entierro ilegal de restos entre los cuales podían encontrarse los de Rainer Ibsen Cárdenas, a juicio de la Corte IDH la identificación científicamente aceptable solo se realizó en 2007 mediante la técnica del ADN⁷⁵, siendo ese el momento a partir del cual se conoció de manera definitiva el paradero de la víctima⁷⁶. Sin embargo, la sentencia argumentó que el deber de investigación subsiste hasta que se determinen las responsabilidades de los perpetradores, pese a que los restos de la persona desaparecida

⁷⁰ Dulitzky y Anayanssi Orizaga (2019), p. 15. Cfr. Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párrs. 215, 225; Corte IDH, *Blanco Romero y otros Vs. Venezuela*, de 22 de noviembre de 2011, párr. 13.

⁷¹ Corte IDH, *Anzualdo Castro vs. Perú*, Serie C Nro. 202, de 22 de septiembre de 2009, párr. 185; Corte IDH, *Garrido y Baigorria Vs. Argentina*, de 30 de agosto de 2017, párr. 29; Corte IDH, *Osorio Rivera y familiares Vs. Perú*, Serie C Nro. 274, de 26 de noviembre de 2013, párr. 251.

⁷² Corte IDH, *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala*, Serie C Nro 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 333; Corte IDH, *Osorio Rivera y familiares Vs. Perú*, Serie C Nro. 274, de 26 de noviembre de 2013, párr. 250.

⁷³ Corte IDH, *Blanco Romero y otros Vs. Venezuela*, de 22 de noviembre de 2011, párr. 13; Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párr. 214.

⁷⁴ *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principios 7.1, 7.3; CED (2016), párr. 26.a.

⁷⁵ Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párrs. 84-91.

⁷⁶ Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párr. 92.

hayan sido identificados⁷⁷. Este es un punto relevante para dar cuenta de que investigación y búsqueda son obligaciones relacionadas, pero diferentes.

En la jurisprudencia de la Corte IDH se han desarrollado algunos estándares mínimos que debería cumplir la búsqueda, los que en su mayoría son similares a los criterios que el tribunal interamericano ha desarrollado a propósito del deber de investigación. Así, la búsqueda debe realizarse de oficio por las autoridades estatales, porque no puede depender de la iniciativa de los familiares u otras personas⁷⁸.

Además, los Estados deben iniciar la búsqueda de manera inmediata, tan pronto se tenga noticia de su desaparición⁷⁹, porque la probabilidad de encontrar con vida a la persona es más alta en las primeras horas o días de la desaparición⁸⁰. Por otra parte, respecto de las víctimas no encontradas en un tiempo próximo a la desaparición, es relevante que el Estado persista con las diligencias. El transcurso del tiempo dificulta la búsqueda, porque las pruebas materiales pueden perderse, los restos de las víctimas pueden deteriorarse y descomponerse, los familiares, testigos y perpetradores pueden fallecer, todo lo cual influye en la pérdida de oportunidades para obtener información sobre lugares, personas o hechos⁸¹.

La búsqueda debe ser realizada de una manera seria y eficaz mediante el empleo de los recursos humanos, técnicos y científicos disponibles⁸². Incluso, la Corte IDH ha indicado que el Estado debe aplicar estándares que cuentan con aceptación internacional, mencionando como ejemplo el *Protocolo de Minnesota*⁸³. En algunos casos, se ha señalado que el Estado debe planificar las tareas de localización sobre la base de toda la información de la que se dispone⁸⁴.

⁷⁷ Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párr. 225.

⁷⁸ Corte IDH, *Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú*, Serie C Nro. 299, de 1 de septiembre de 2015, párr. 227; Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párr. 159; CED (2016), párr. 26.a; CED (2013), párr. 32; Consejo de Derechos Humanos (2013 b), párr. 16; Consejo de Derechos Humanos (2011 a), párr. 102.a.

⁷⁹ Corte IDH, *Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú*, Serie C Nro. 299, de 1 de septiembre de 2015, párr. 227.

⁸⁰ Dulitzky y Anayanssi Orizaga (2019), p. 54. Cfr. Corte IDH, *Contreras y otros Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 232, de 31 de agosto de 2011, párr. 145; Corte IDH, *Tiu Tojín Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 190, de 26 de noviembre de 2008, párr. 103; CED (2015), párr. 41.a; CED (2016), párr. 26.a.

⁸¹ Dulitzky y Anayanssi Orizaga (2019), p. 57; Fowler y Thompson (2017), pp. 119-120. Cfr. Consejo de Derechos Humanos (2010 a), párr. 36; Consejo de Derechos Humanos (2015), párr. 8; Consejo de Derechos Humanos (2016 c), párr. 9.

⁸² CED (2016), párr. 26.a; Corte IDH, *19 Comerciantes Vs. Colombia*, Serie C Nro. 109, de 5 de julio de 2004, párrs. 270-271; Corte IDH, *Contreras y otros Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 232, de 31 de agosto de 2011, párr. 191; Corte IDH, *Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú*, Serie C Nro. 299, de 1 de septiembre de 2015, párr. 227; Corte IDH, *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 334; Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párr. 242; Corte IDH, *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*, Serie C Nro. 287, de 14 de noviembre de 2014, párr. 480.

⁸³ Corte IDH, *Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*, Serie C Nro. 140, de 31 de enero de 2006, párrs. 270-271; Corte IDH, *Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*, de 9 de julio de 2009, párr. 21.

⁸⁴ Corte IDH, *Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia*, de 27 de febrero de 2012, párr. 21.

Finalmente, es imprescindible que los familiares sean informados de las diligencias de búsqueda, tengan acceso a ellas y puedan participar de las mismas⁸⁵.

4.2.1.2. BÚSQUEDA Y DERECHO A LA VERDAD

El deber de búsqueda también mantiene una estrecha conexión con el derecho a la verdad. Este derecho implica la facultad de los familiares y otras personas de saber cuál es su paradero y la suerte de la persona desaparecida⁸⁶.

La sociedad en su conjunto también debe conocer las circunstancias relacionadas con la comisión de las violaciones a los derechos humanos⁸⁷. Según Joinet “al Estado le incumbe, el «deber de recordar», a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo”⁸⁸. En un sentido similar, en la sentencia sobre la *Masacre de Río Negro vs. Guatemala*, la Corte IDH ha argumentado que “[l]a localización e identificación de las víctimas devela una verdad histórica que contribuye a cerrar el proceso de duelo de la comunidad maya Achí de Río Negro; aporta a la reconstrucción de su integridad cultural; enaltece la dignidad de las personas desaparecidas o presuntamente ejecutadas y la de sus familiares, quienes han luchado durante décadas por encontrar a sus seres queridos, y sienta un precedente para que violaciones graves, masivas y sistemáticas, como las ocurridas en este caso, no vuelvan a suceder”⁸⁹.

Por tanto, existe una clara vinculación entre la búsqueda y la verdad, dado que en el caso de la desaparición forzada la satisfacción de uno de ellos beneficia el ejercicio del otro.

4.2.1.3. BÚSQUEDA Y DERECHO A LA REPARACIÓN

⁸⁵ *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), preámbulo párr. 4 y principios 3.5, 5, 8.3; Corte IDH, *Contreras y otros Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 232, de 31 de agosto de 2011, párr. 192; Corte IDH, *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 334; Corte IDH, *Osorio Rivera y familiares Vs. Perú*, Serie C Nro. 274, de 26 de noviembre de 2013, párr. 251.

⁸⁶ GTDFI (2011), p. 14, párr. 1; Consejo de Derechos Humanos (2012), párr. 63; Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párr. 214; Corte IDH, *Radilla Pacheco Vs. México*, de 14 de mayo de 2013, párr. 17; Corte IDH, *Vereda La Esperanza Vs. Colombia*, Serie C Nro. 341, de 31 de agosto de 2017, párr. 221; Corte IDH, *Anzualdo Castro vs. Perú*, Serie C Nro. 202, de 22 de septiembre de 2009, párr. 185.

⁸⁷ Comisión de Derechos Humanos (2006), párr. 36; GTDFI (2011), p. 13; Consejo de Derechos Humanos (2011), párr. 571; CIDH (2014), párrs. 15, 81-82; CIDH, Ignacio Ellacuría, S.J.; Segundo Montes, S.J.; Armando López, S.J.; Ignacio Martín Baró, S.J.; Joaquín López y López, S.J.; Juan Ramón Moreno, S.J.; Julia Elba Ramos; y Celina Mariceth Ramos, El Salvador, 22 de diciembre de 1999, párr. 224; Corte IDH, *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 70, de 25 de noviembre de 2000, Voto Razonado del juez Cançado Trindade, párr. 30; Corte IDH, *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*, de 22 de febrero de 2002, párr. 77; Corte IDH, *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 92, de 27 de febrero de 2002, párr. 114.

⁸⁸ Comisión de Derechos Humanos (1997), párr. 17.

⁸⁹ Corte IDH, *Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 250, de 4 de septiembre de 2012, párr. 265.

El esclarecimiento de la suerte y paradero de la persona desaparecida constituye una forma de reparación para los familiares, porque el conocimiento de la verdad contribuye al alivio de su angustia y sufrimiento⁹⁰. Así ha sido establecido en los principios sobre la lucha contra la impunidad de la ONU, elaborados por la experta Diane Orentlicher⁹¹.

En su jurisprudencia sobre desapariciones forzadas, la Corte IDH suele imponer como medida de reparación, la realización de diligencias de investigación y búsqueda destinadas a encontrar a las víctimas⁹². Asimismo, en la práctica internacional sobre la desaparición forzada, se ha señalado que la identificación de la persona desaparecida o su puesta en libertad en el evento de que estuviere viva, constituyen una forma de restitución⁹³. En la misma línea, se ha considerado la búsqueda tiene por objeto la reparación de los daños inmateriales causados por la desaparición⁹⁴. Finalmente, los Principios de Naciones Unidas sobre las Reparaciones establecen que son medidas de satisfacción “la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos”⁹⁵.

Por lo tanto, la búsqueda contribuye con la reparación integral y concreta varias de sus modalidades.

4.2.2. El impulso de un modelo complementario de búsqueda

Como se ha adelantado, la jurisprudencia en la práctica de los órganos internacionales de derechos humanos ha promovido la implementación de una política pública de búsqueda por parte de los Estados. Sus principales aportaciones se han referido a las características que debería tener un órgano administrativo con competencia específica para emprender búsqueda, a las etapas que deberían integrar una planificación nacional para cumplir satisfactoriamente con la obligación internacional de llevarla a cabo y al papel que deben desempeñar las ciencias forenses. Todas estas cuestiones serán analizadas a continuación.

4.2.2.1. EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE BÚSQUEDA

⁹⁰ Corte IDH, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párr. 214; Corte IDH, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, de 14 de mayo de 2013, párr. 17; Corte IDH, Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala, Serie C Nro. 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 333; Corte IDH, Osorio Rivera y familiares Vs. Perú, Serie C Nro. 274, de 26 de noviembre de 2013, párr. 249; Corte IDH, Radilla Pacheco Vs. México, de 14 de mayo de 2013 párr. 17; Consejo de Derechos Humanos (2013 c), párr. 54.

⁹¹ Comisión de Derechos Humanos (2005), principio 34.

⁹² Corte IDH, Durand y Ugarte Vs. Perú, Serie C Nro. 89, de 3 de diciembre de 2001, párr. 39.d.

⁹³ Corte IDH, Contreras y otros Vs. El Salvador, Serie C Nro. 232, de 31 de agosto de 2011, párr. 193; Consejo de Derechos Humanos (2013 c), párr. 55.

⁹⁴ Corte IDH, 19 Comerciantes Vs. Colombia, Serie C Nro. 109, de 5 de julio de 2004, párr. 264.

⁹⁵ Asamblea General de la ONU (2005), principio 22.c

En términos generales, tanto la Corte IDH como el GTDFI y el CED, se han mostrado favorables a la creación de órganos de búsqueda por parte del Estado o han recomendado su implementación⁹⁶. En la práctica internacional se ha insistido en la necesidad de que este órgano sea independiente e imparcial⁹⁷. En cuanto a sus características y competencias, los Principios Rectores del CED recomiendan que tenga con una buena estructura administrativa, recursos materiales suficientes, personal competente y presupuesto adecuado, todo lo anterior, a fin de garantizar que la búsqueda tenga pretensiones de eficacia⁹⁸.

El órgano debería tener atribuciones amplias⁹⁹, entre otras, la facultad de acceder a los lugares que sean necesarios, incluyendo instalaciones militares y de policía, especialmente, si en ellos pueden encontrarse personas desaparecidas¹⁰⁰. El acceso a los archivos y a toda otra fuente documental de información —incluyendo los documentos de seguridad nacional¹⁰¹— también es una atribución relevante para la búsqueda de las personas desaparecidas¹⁰². Incluso, se ha recomendado que el órgano de búsqueda tenga la facultad para requerir dicha información a entidades públicas y privadas, las que deberían tener un deber legal de cooperación¹⁰³.

En un modelo complementario de búsqueda es indispensable delimitar con precisión las competencias del órgano de búsqueda y las de los tribunales de justicia, regulándose la relación

⁹⁶ Corte IDH, *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 335; Corte IDH, *Ilsen Cárdenas e Ilsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párrs. 221-222; Corte IDH, *Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 328, de 30 de noviembre de 2016, párr. 295; Corte IDH, *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, de 16 de noviembre de 2009, párr. 18; Corte IDH, *Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 120, de 1 de marzo de 2005, párr. 183; Consejo de Derechos Humanos (2014), párr. 23; Consejo de Derechos Humanos (2007 b), párr. 64; Consejo de Derechos Humanos (2016 b), párr. 35; Consejo de Derechos Humanos (2016 a), párrs. 67.m, 71; Consejo de Derechos Humanos (2013 a), párr. 115; CED (2013), párr. 32.a; CED (2015), párr. 40. Sin embargo, en algunos casos ha rechazado la petición de decretar la creación de un órgano de búsqueda, dejando al Estado en libertad de acción en lo que se refiere a la elección de las estrategias de búsqueda. Vid. Corte IDH, *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*, Serie C Nro. 287, de 14 de noviembre de 2014, párr. 565.

⁹⁷ Cfr. Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principio 15.1; Corte IDH, *Caracazo Vs. Venezuela*, de 23 de septiembre de 2009, párr. 13; Corte IDH, *Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 285, de 14 de octubre de 2014, párr. 198; Corte IDH, *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, de 16 de noviembre de 2009, párr. 18; Corte IDH, *Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 120, de 1 de marzo de 2005, párr. 187; Consejo de Derechos Humanos (2010 a), párrs. 30, 78; Consejo de Derechos Humanos (2009), párrs. 28, 82; Consejo de Derechos Humanos (2016 a), párr. 71.

⁹⁸ Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principios 4, 8.4, 10.2. En doctrina, cfr. Crettol et al. (2017), p. 607; Drawdy y Katzmarzyk (2016), p. 71. Sobre la necesidad de soporte financiero adecuado y personal competente, cfr. CED (2016), párrs. 26.c, 26.d; CED (2014), párr. 28.a; Consejo de Derechos Humanos (2010 a), párrs. 30, 33, 79; Consejo de Derechos Humanos (2016 a), párr. 71; Corte IDH, *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, de 16 de noviembre de 2009, párr. 18; Corte IDH, *Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 120, de 1 de marzo de 2005, párr. 187; Corte IDH, *Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 191, de 27 de noviembre de 2008, párr. 173.

⁹⁹ Consejo de Derechos Humanos (2017), párr. 79.b. Cfr. Crettol et al. (2017), pp. 600-601, 604, 608-609, 612.

¹⁰⁰ Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principios 10.3, 10.4.

¹⁰¹ Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principio 10.4. En doctrina, vid. Crettol et al. (2017), p. 607. Así ocurre en Perú y Colombia. Vid. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Perú (2017), p. 11; Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (2012), pp. 14-16.

¹⁰² Baumgartner y Ott (2017), pp. 670, 675; Comisión de Derechos Humanos (2005), principios 14 a 18; Corte IDH, *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*, Serie C Nro. 287, de 14 de noviembre de 2014, párr. 487; Corte IDH, *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, de 16 de noviembre de 2009, párr. 18; Corte IDH, *Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 120, de 1 de marzo de 2005, párr. 186.

¹⁰³ CICR (2009 b), pp. 37-38.

que debe mediar entre ellos. Según los *Principios Rectores* del CED, la investigación judicial y la búsqueda deben realizarse con la misma efectividad, reforzarse mutuamente y no obstaculizarse entre sí. Los procedimientos de búsqueda en sede administrativa no deben dificultar la realización de investigaciones penales, ni deben conllevar su sustitución. Por su parte, si la búsqueda solo se realiza por los tribunales de justicia, debe prestarse la misma atención tanto a la investigación penal como a la búsqueda en sí misma¹⁰⁴. Finalmente, los *Principios Rectores* añaden que la finalización de la investigación criminal no debe ser un obstáculo para continuar con las actividades de búsqueda, si no se ha encontrado a la persona desaparecida o sus restos¹⁰⁵. En base a todo lo anterior, es esencial que exista una coordinación efectiva entre todos los órganos estatales con competencias sobre la búsqueda¹⁰⁶.

4.2.2.2. LA PLANIFICACIÓN DE LA BÚSQUEDA A NIVEL NACIONAL

La búsqueda de las personas desaparecidas debe ser organizada sobre la base de una planificación que tenga alcance nacional en cada Estado. De hecho, los Principios Rectores del CED sugieren la confección de una “estrategia integral”, diseñada con la participación de las víctimas, sometida a supervisión y reevaluación permanente, que especifique las acciones a realizar para intentar encontrar, exhumar y establecer la identidad de las personas desaparecidas¹⁰⁷. Para el cumplimiento de este cometido, tanto la Corte IDH como el GTDFI han recomendado protocolizar un plan específico a nivel nacional y han especificado las características y condiciones que debería tener¹⁰⁸.

Una de las primeras tareas que el Estado debe cumplir en el proceso de búsqueda consiste en la organización de la información¹⁰⁹. Para tal efecto, es necesario analizar diversas fuentes — expedientes judiciales, archivos estatales y de organizaciones de la sociedad civil, declaraciones de testigos y familiares, artículos de prensa, informes de las comisiones de la verdad— y

¹⁰⁴ Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principio 13.

¹⁰⁵ Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principio 13.4.

¹⁰⁶ Navarro et al. (2010), norma 14; Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principios 3.4, 12; CED (2016), párr. 26.c; CICR (2009 b), pp. 27-28; Corte IDH, Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala, Serie C Nro. 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 336; Corte IDH, Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador, Serie C Nro. 285, de 14 de octubre de 2014, párr. 251. En doctrina, vid. Crettol et al. (2017), p. 607.

¹⁰⁷ Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principio 8.3.

¹⁰⁸ Consejo de Derechos Humanos (2016 a), párr. 23; Consejo de Derechos Humanos (2007 a), párr. 54; Corte IDH, 19 Comerciantes Vs. Colombia, de 8 de julio de 2009, considerando 24; Corte IDH, Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, Serie C Nro. 299, de 1 de septiembre de 2015, párr. 318; Corte IDH, Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, Serie C Nro. 250, de 4 de septiembre de 2012, párr. 268. En esta última sentencia, la Corte exigió la confección de un cronograma con metas y actividades específicas que indicare los órganos que participarían de la búsqueda. Además, exigió el empleo de los estándares técnicos y científicos adecuados, la implementación de medidas de seguridad para quienes intervendrían en las actividades y la participación de los familiares en todas las etapas.

¹⁰⁹ CICR (2003 c), pp. 55, 87-90.

sistematizarla de acuerdo con criterios objetivos, sin descartar ninguna hipótesis sobre la suerte de la persona desaparecida¹¹⁰.

Un mecanismo indispensable para sistematizar la información es la creación de un registro único, centralizado y actualizado de personas desaparecidas y sitios de entierro, que cuente con un soporte informático y que permita de manera permanente la calificación de las víctimas¹¹¹. En cuanto al contenido del registro, los *Principios Rectores* especifican algunos datos a incorporar, a saber: la autoridad que ingresa los datos; las fechas en que una persona fue dada por desaparecida, encontrada con vida, exhumado su cuerpo, o cuyos restos mortales fueron identificados o entregados; las investigaciones que permitan establecer si se trató de una desaparición forzada y el motivo de la desaparición¹¹². Otros datos que podrían resultar relevantes para la búsqueda son: la individualización detallada de la persona desaparecida; la aclaración de si ha sido o no identificada; en caso de haberlo sido, la identificación del o los sitios de entierro y las circunstancias de la recuperación, exhumación, identificación y entrega de restos; la descripción de los hechos que condujeron a la desaparición; el lugar de la privación de libertad y los centros de detención en que permaneció recluida la víctima; el detalle de su destino final si fuere conocido; la identificación de los procesos judiciales relacionados con el caso; la identificación de los familiares u otras personas cercanas; la existencia de muestras genéticas para una eventual identificación; la individualización de los autores del delito¹¹³. El órgano de búsqueda debería diseñar un protocolo de ingreso y certificación de veracidad de toda esta información¹¹⁴.

La recopilación de la información debe servir como insumo para la elaboración de estrategias concreta de búsqueda que tengan por objeto la ubicación de los restos, su recuperación, identificación y restitución a los familiares. De ser posible, la búsqueda debe tender a la reconstrucción del destino de la víctima y la recopilación de evidencias que puedan utilizarse en los procesos judiciales. En los contextos de violaciones generalizadas o sistemáticas de derechos humanos, la búsqueda debería realizarse considerándose el contexto de ejecución de las desapariciones, centrando la mirada en el análisis de cuestiones como los motivos, los patrones de ejecución y los perfiles de perpetradores y víctimas¹¹⁵. También es importante que la

¹¹⁰ Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principio 8.1 y 8.2.

¹¹¹ Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principios 11.1, 11.2; CICR (2009 b), pp. 7, 31-32; CICR (2003 c), p. 55. En doctrina, cfr. Baumgartner y Ott, pp. 678-680; Drawdy y Katzmarzyk, p. 71.

¹¹² Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019), principio 11.2.

¹¹³ Consejo de Derechos Humanos (2013 b), párr. 23; CICR (2009 b), pp. 31-32.

¹¹⁴ CICR (2009 b), pp. 27, 31-32.

¹¹⁵ *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principio 8.6.

búsqueda se realice con un enfoque diferencial si es que las víctimas son personas especialmente protegidas, como niños, niñas y adolescentes; mujeres o integrantes de pueblos indígenas¹¹⁶.

Ahora bien, es muy relevante que el plan nacional de búsqueda contemple mecanismos eficaces que aseguren la participación de los familiares en todas las etapas, quienes además deben tener asegurado el derecho de aportar información, a ser informados sobre las medidas adoptadas y a recibir una adecuada orientación sobre sus derechos¹¹⁷. Incluso, es recomendable permitir a las víctimas participar en los procesos de exhumación e identificación, con la finalidad de que se comprendan en qué consisten y cómo se realicen, los vivencien como actos conmemorativos y colaboren con la consecución de sus fines¹¹⁸. De todos modos, debe tratarse de una participación voluntaria, porque podría ocurrir que las víctimas no quieran involucrarse en la búsqueda. Finalmente, los familiares tienen derecho a que se les brinde un adecuado acompañamiento psicosocial durante todo el proceso de búsqueda y con posterioridad a la restitución de los restos¹¹⁹.

En base a todo lo expuesto, cabe concluir que la búsqueda de las personas desaparecidas es una obligación que a nivel interno debe ser cuidadosamente organizada mediante un plan nacional. Aunque los detalles de cada etapa deben concretarse en cada contexto local, a nivel internacional se han elaborado recomendaciones básicas con el objeto de que la búsqueda se realice con eficacia.

4.2.2.3. EL PAPEL DE LAS CIENCIAS FORENSES

Las ciencias forenses cumplen un papel esencial en la búsqueda de personas desaparecidas, porque contribuyen a rescatar el cuerpo de la persona desaparecida de la situación de despojo, violencia y destrucción al cual fue sometida¹²⁰. En ese sentido, las ciencias forenses son indispensables para la identificación del sitio de entierro, las exhumaciones, la recuperación de los restos, su identificación y su restitución. De hecho, en la práctica y jurisprudencia internacional de derechos humanos se han elaborado algunas recomendaciones sobre estos procesos.

¹¹⁶ *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principios 2.2, 3.2, 4, 5.2, 8.7, 8.8, 9, 10.2, 15.1.

¹¹⁷ *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), preámbulo párr. 4, principios 3.5, 5, 8.3; Navarro *et al.* (2010), norma 3; CICR (2009 b), p. 37; CICR (2003 c), pp. 34, 39. En doctrina, vid. Crettol *et al.* (2017), pp. 600, 605, 608; Drawdy y Katzmarzyk (2016), p. 69; Pearlman (2008), p. 17; Stover y Shigekane (2002), p. 862.

¹¹⁸ Stover y Shigekane (2004), p. 96; Cordner y McKelvie (2002), pp. 879-880.

¹¹⁹ *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principios. 3.6, 14.3; CICR (2003 c), p. 63.

¹²⁰ Anstett *et al.* (2013), pp. 11-12, destacando la importancia de los estudios interdisciplinarios sobre el cuerpo y su relación con la violencia de masa.

Por ejemplo, la Corte IDH ha ordenado la realización de exhumaciones como medida de reparación¹²¹ y ha señalado que deben realizarse en presencia de los familiares¹²². Es muy relevante que las exhumaciones se realicen sobre la base de estándares forenses científicamente adecuados y que cuenten con aceptación internacional¹²³, como por ejemplo el *Protocolo de Minnesota*, un instrumento de vocación universal que establece recomendaciones básicas para la realización de estas diligencias¹²⁴. También se ha señalado que el Estado debe buscar los sitios de entierro y, una vez encontrados, sistematizar la información sobre ellos e implementar medidas de protección¹²⁵.

En otro ámbito, la Corte IDH ha exigido que las pruebas periciales para la identificación de las personas desaparecidas se realicen dentro de breve tiempo desde que se produce la exhumación o hallazgo de los restos¹²⁶. Al igual que en el caso de las exhumaciones, las técnicas de identificación deben estar protocolizadas con claridad, ser científicamente adecuadas y tener aceptación internacional¹²⁷. La tendencia general de la práctica y jurisprudencia internacional

¹²¹ Corte IDH, *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 91, de 22 de febrero de 2002, párr. 83.

¹²² Corte IDH, *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 91, de 22 de febrero de 2002, párr. 82; Corte IDH, *Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 328, de 30 de noviembre de 2016, párr. 296. En el mismo sentido. véase Consejo de Derechos Humanos (2013 a), párr. 116; Stover y Shigekane (2002), pp. 850, 860-861.

¹²³ Consejo de Derechos Humanos (2014), párr. 23; Consejo de Derechos Humanos (2016 a), párr. 24; Corte IDH, *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, de 16 de noviembre de 2009, párr. 15. Para una explicación sencilla de lo que debe hacerse en una exhumación, vid. Taccon (2013), pp. 51-53.

¹²⁴ Consejo de Derechos Humanos (2013 a), párrs. 56-57, 116; Corte IDH, *Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 328, de 30 de noviembre de 2016, párr. 294.

¹²⁵ Corte IDH, *Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú*, Serie C Nro. 299, de 1 de septiembre de 2015, párr. 318; Consejo de Derechos Humanos (2016 a), párrs. 74, 77; Consejo de Derechos Humanos (2016 b), párr. 42, criticando al Estado por realizar una búsqueda de sitios de entierro si no existe orden judicial que lo ordene.

¹²⁶ Por ejemplo, este deber no se cumplió en el caso de la Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párrs. 218-219, dado que habían transcurrido 4 años desde el hallazgo de los restos, sin que se hubiere practicado alguna diligencia de identificación.

¹²⁷ Corte IDH, *Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 328, de 30 de noviembre de 2016, párr. 294; Corte IDH, *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, de 16 de noviembre de 2009, párr. 16; Consejo de Derechos Humanos (2014), párr. 23; Consejo de Derechos Humanos (2016 a), párr. 24; Consejo de Derechos Humanos (2011 a), párrs. 49-50.

es favorable a las pruebas genéticas¹²⁸, a menos que no sea posible practicarlas, en cuyo caso deberán tomarse en consideración otros métodos¹²⁹.

En algunos casos, los organismos internacionales han ordenado a los Estados implementar un banco de información genética¹³⁰. Estos bancos permiten sistematizar esta información tanto respecto de los restos de las víctimas, como de las muestras de sangre de los familiares que consintieron en otorgarlas, facilitando la tarea de identificación, la que se realiza comparando ambos tipos de datos¹³¹.

En relación con los restos de las personas desaparecidas, la Corte IDH ha sostenido que los familiares tienen un derecho a conocer dónde se encuentran¹³² y que su identificación y restitución constituyen una medida de reparación¹³³. Los restos deben ser tratados de una manera respetuosa, entregados a los familiares después de su identificación, sin gasto alguno, debiendo el Estado cubrir los gastos fúnebres, todo lo anterior con la finalidad de que los familiares puedan celebrar el rito fúnebre de acuerdo con sus tradiciones, religión y costumbres¹³⁴. En cuanto a los restos no identificados es indispensable conservar en el registro

¹²⁸ Consejo de Derechos Humanos (2017), párr. 41; GTDFI (2011), p. 16, párr. 6; Corte IDH, *Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 250, de 4 de septiembre de 2012, párr. 270; Corte IDH, *Anzualdo Castro vs. Perú*, Serie C Nro. 202, de 22 de septiembre de 2009, párrs. 152-153, declarando un incumplimiento de la diligencia debida en la investigación, porque las autoridades estatales no ordenaron pericias para contrastar los restos encontrados con el ADN de familiares; Corte IDH, *González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*, Serie C Nro. 205, de 16 de noviembre de 2009, párrs. 313-333, dando cuenta de muchas irregularidades en la identificación, ya que los cuerpos se entregaron a los familiares sin haber sido identificados por medio de pruebas científicas y hubo errores en la realización posterior de las pericias genéticas; Corte IDH, *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia*, Serie C Nro. 287, de 14 de noviembre de 2014, párrs. 104 y 151-155, caso emblemático en que la Corte critica las identificaciones realizadas por las razones siguientes: no se contó con recursos personales y técnicos adecuados, los forenses fueron sometidos a presiones y no contaron con tiempo suficiente para realizar las necropsias, se utilizó el método de identificación morfológica respecto de cuerpos calcinados pese a la incertidumbre de esta técnica, se entregaron a los familiares cuerpos con un sexo distinto al de la identidad de la víctima y se enterraron en fosas comunes cuerpos de víctimas identificadas; Corte IDH, *Gómez Palomino Vs. Perú*, de 13 de febrero de 2013, párr. 10; Corte IDH, *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 334.

¹²⁹ Corte IDH, *Gómez Palomino Vs. Perú*, de 13 de febrero de 2013, párrs. 9-15, caso en que la víctima fue identificada mediante el reconocimiento de prendas y la constatación de una malformación ósea; Corte IDH, *Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 328, de 30 de noviembre de 2016, párr. 295. Sobre la diversidad de métodos científicos de identificación y los problemas que presentan, vid. Fowler y Thompson (2017), pp. 121-129.

¹³⁰ Corte IDH, *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 336; Corte IDH, *Molina Theissen Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 108, de 3 de julio de 2004, párr. 91.b; *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principio 11.7; CED (2016), párr. 26.b, recomendando también la realización de campañas para la obtención de muestras genéticas de los familiares; CED (2014), párr. 28.b; Consejo de Derechos Humanos (2010 b), párr. 106; Consejo de Derechos Humanos (2014), párr. 23; Consejo de Derechos Humanos (2016a), párr. 24, criticando la inexistencia de un banco genético.

¹³¹ Dulitzky y Anayanssi (2019), pp. 94-95.

¹³² Corte IDH, *19 Comerciantes Vs. Colombia*, Serie C Nro. 109, de 5 de julio de 2004, párrs. 265, 267; Corte IDH, *Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 131, de 9 de septiembre de 2005, párr. 178; Corte IDH, *Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*, Serie C Nro. 99, de 7 de junio de 2003, párr. 187; GTDFI (2011), p. 16, párr. 6, incluyendo el derecho a la recuperación de los restos en el derecho a la verdad.

¹³³ Corte IDH, *19 Comerciantes Vs. Colombia*, Serie C Nro. 109, de 5 de julio de 2004, párrs. 265-266; Corte IDH, *Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*, Serie C Nro. 99, de 7 de junio de 2003, 187.

¹³⁴ Corte IDH, *19 Comerciantes Vs. Colombia*, Serie C Nro. 109, de 5 de julio de 2004, párr. 265; Corte IDH, *Anzualdo Castro vs. Perú*, Serie C Nro. 202, de 22 de septiembre de 2009, párr. 185; Corte IDH, *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 91, de 22 de febrero de 2002, párrs. 81-82, destacando la importancia y significado del rito fúnebre para la etnia mam del pueblo maya; Corte IDH, *Contreras y otros Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 232, de 31 de agosto de 2011, párr. 192; Corte IDH, *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 253, de 20 noviembre de 2012, párr. 334; Corte IDH, *Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*,

de personas desaparecidas la información recopilada sobre ellos¹³⁵. En caso de que no sean reclamados algunos restos y se decida sepultarlos, se debe proceder al entierro conservando un registro para permitir su individualización¹³⁶.

Hay una sentencia llamativa de la Corte IDH sobre la reconstrucción del destino de una persona desaparecida ante la imposibilidad comprobada de hallar sus restos. Se trata de la sentencia *Rochac Hernández y otros vs. El Salvador*, que entre otras violaciones a los derechos humanos, se refiere a la desaparición de un niño cuyo cuerpo cayó a las aguas de un río siendo imposible recuperarlo. En una sentencia de supervisión, la Corte concluyó que el Estado habría cumplido con su deber de determinar el paradero de esta víctima, considerando que las partes del proceso estaban de acuerdo con la imposibilidad de recuperar los restos¹³⁷.

La conclusión por la imposibilidad de recuperación de los restos debe basarse en información fidedigna, contundente, contrastada y objetiva. Los *Principios Rectores* contienen estándares sobre este punto, distinguiendo cuatro situaciones. De acuerdo con la primera hipótesis, si la persona desaparecida es hallada con vida, “la búsqueda solo puede considerarse terminada cuando la persona se encuentre nuevamente bajo la protección de la ley”¹³⁸. En ese caso, según la Corte IDH el Estado debe asumir los gastos de su identificación, disponer las medidas pertinentes para el reencuentro con sus familiares y brindar atención psicosocial¹³⁹. Este criterio es especialmente importante en los supuestos de niños y niñas desaparecidas cuya identidad es reestablecida.

Conforme a un segundo supuesto, “Si la persona desaparecida es encontrada sin vida, la búsqueda se puede considerar terminada cuando la persona haya sido plenamente identificada conforme a los estándares internacionales y recibida en condiciones de dignidad por sus familiares o allegados”¹⁴⁰.

Serie C Nro. 131, de 9 de septiembre de 2005, párr. 178; Corte IDH, *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*, Serie C Nro. 217, de 1 de septiembre de 2010, párr. 242; Corte IDH, *Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*, Serie C Nro. 140, de 31 de enero de 2006, párr. 273; Corte IDH, *Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*, Serie C Nro. 99, de 7 de junio de 2003, párr. 187; Corte IDH, *Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 250, de 4 de septiembre de 2012, párr. 270; Corte IDH, *Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 328, de 30 de noviembre de 2016, párr. 294; Corte IDH, *Osorio Rivera y familiares Vs. Perú*, Serie C Nro. 274, de 26 de noviembre de 2013, párrs. 250 y 252. Cfr. *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principio 2.4; CED (2014), cit., párr. 28.c; CICR (2003 c), pp. 34, 44-45, 64-66, 121-123; CICR (2009 b), pp. 45-46, 48.

¹³⁵ CICR (2009 b), pp. 49-50.

¹³⁶ Corte IDH, *Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*, Serie C Nro. 250, de 4 de septiembre de 2012, párr. 271.

¹³⁷ Corte IDH, *Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador*, de 9 de febrero de 2017, párrs. 4-5.

¹³⁸ *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principio 7.2.

¹³⁹ Corte IDH, *Contreras y otros Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 232, de 31 de agosto de 2011, párr. 192; Corte IDH, *Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador*, Serie C Nro. 285, de 14 de octubre de 2014, párr. 199.

¹⁴⁰ *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principio 7.3.

Un tercer supuesto se puede producir cuando solo se identifican algunos restos, en cuyo caso “la decisión sobre continuar la búsqueda para ubicar e identificar los restos faltantes debe considerar las posibilidades reales de identificar más restos y las necesidades expresadas por los familiares, en el marco de sus normas culturales funerarias”, especificándose que “la decisión de continuar la búsqueda debe [...] contar con el consentimiento previo e informado de los familiares”¹⁴¹.

Finalmente, la situación más problemática es aquella en que no se encuentra a la persona desaparecida, pero existen “pruebas fehacientes, más allá de una duda razonable, de su suerte o su paradero”. En ese caso, “la búsqueda podría suspenderse cuando no exista posibilidad material de recuperar a la persona, una vez agotado el análisis de toda la información alcanzable y la investigación de todas las hipótesis posibles. Esta decisión debe tomarse de manera transparente y contar con el consentimiento previo e informado de los familiares o allegados de la persona desaparecida”¹⁴². Respecto de este último supuesto, el estándar del CED no recomienda al Estado reconstruir un relato sobre la persona desaparecida, aunque es indiscutible que está obligado a ello, porque debe cumplir con el deber internacional de satisfacer el derecho a la verdad de los familiares¹⁴³.

Las recomendaciones que han sido explicadas en esta sección demuestran que el cumplimiento de la obligación de búsqueda requieren las aportaciones de varios saberes con un sentido de interdisciplinaridad. Las ciencias forenses desempeñan funciones cruciales en las diversas etapas que integran un proceso de búsqueda, especialmente, en lo que se refiere a la exhumación e identificación de los restos de las personas desaparecidas. Como se ha analizado, el Derecho internacional de los derechos humanos está contribuyendo a delinear los estándares básicos que deben ser cumplidos por los Estados en este ámbito.

5. Conclusiones

Para esquematizar la manera en que la búsqueda de las personas desaparecidas se realiza a nivel interno por los Estados, pueden diferenciarse tres modelos teóricos, el primero de tipo judicial, el segundo de índole administrativa y finalmente el tercero de carácter complementario. Si bien el presente trabajo no ha tenido por objeto realizar un estudio de Derecho comparado

¹⁴¹ *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principio 7.3.

¹⁴² *Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas* (2019), principio 7.4.

¹⁴³ Navarro *et al.* (2010), norma 4; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Perú (2017), p. 16.

sobre las similitudes y diferencias de las políticas públicas de búsqueda implementadas por los Estados, el análisis que se ha abordado ofrece una gama de respuestas sobre el contenido de los deberes internacionales que deben cumplir. Estas respuestas permitirían en futuras investigaciones emprender un análisis sobre el nivel de cumplimiento de dichos deberes en Latinoamérica por parte de los países que han regulado la búsqueda de las personas desaparecidas.

Las reflexiones esbozadas en este artículo han sido divididas en base a dos áreas temáticas generales, las que abordan, por una parte, los desarrollos normativos del DIH sobre la obligación de búsqueda de personas desaparecidas y, por otra, la evolución y el tratamiento de esta obligación en el seno del Derecho internacional de los derechos humanos, específicamente, en el sistema universal e interamericano.

En cuanto al DIH, las normas convencionales y consuetudinarias contemplan una serie de deberes relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas, el acceso a la información sobre ellas por parte de los familiares, el derecho a la verdad, el tratamiento de los restos y cadáveres y los órganos que tienen competencia para realizar actividades de búsqueda. Asimismo, se ha destacado el papel que ha desempeñado el CICR, el cual adoptando una lógica humanitaria no exenta de críticas, ha impulsado la búsqueda en el plano internacional e interno.

A su vez, la jurisprudencia y la práctica internacional de órganos como la Corte IDH, el GTDFI y el CED, permiten concluir que los Estados están obligados a buscar a las personas desaparecidas y que la persona desaparecida y los familiares son titulares de un derecho humano a la búsqueda. Este derecho detenta una relación de interdependencia con el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación integral.

A nivel internacional se han desarrollado una serie de deberes específicos en la lógica de un modelo complementario, precisándose una gama de estándares sobre la protocolización y planificación de la búsqueda, las competencias del órgano administrativo encargado de llevarla cabo y su relación con los tribunales y el papel que desempeñan las ciencias forenses en la exhumación e identificación de los restos.

Es indispensable comprender que la evolución del Derecho internacional sobre las obligaciones de búsqueda en ningún caso es un punto de llegada, sino un punto de partida. La

desaparición forzada sigue cometiéndose, se ha complejizado y diversificado. Las personas desaparecidas son de todos y todas y es esta la razón que debe impulsar a la comunidad internacional, a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil, a la realización de un esfuerzo mancomunado. La esperanza de encontrarlos y encontrarlas, de una vez por todas, debe convertirse en una realidad.

Bibliografía citada

- Anstett, Élisabeth; Dreyfus, Jean Marc y Garibian, Sévane (2013): “Introducción”, en Anstett, Élisabeth, Dreyfus, Jean-Marc y Garibian, Sévane (dirs.), *Cadáveres impensables, cadáveres impensados. El tratamiento de los cuerpos en las violencias de masa y los genocidios* (Buenos Aires, Miño y Dávila), pp. 11-15.
- Barnett, Michael y Weiss, Thomas G. (2008); “Humanitarianism; A Brief History of The Present”, en Barnett, Michael y Weiss, Thomas G. (eds.), *Humanitarianism in Question. Politics, Power, Ethics* (Ithaca, Cornell University Press), pp. 1-48.
- Baumgartner, Elisabeth y Ott, Lisa (2017): “Determining the Fate if Missing Persons: The Importance of Archives for “Dealing with the Past” Mechanisms”, en *International Review of the Red Cross* (Nº 905), pp. 663-688.
- Cançado Trindade, Antônio Augusto (2012): “Enforced Disappearances of Persons as a Violation of *Jus Cogens*: The Contribution of the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights”, en *Nordic Journal of International Law* (Vol. 81, Nº 4), pp. 507-536.
- Capellà i Roig, Margalida (2006): “Las «desapariciones forzadas» en España durante la guerra civil y el franquismo: violaciones y crímenes de Derecho internacional sin reparación ni castigo”, en Soroeta Liceras, Juan (ed.), *Conflictos y protección de derechos humanos en el orden internacional. Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, Vol. VI* (Bilbao, Universidad del País Vasco), pp. 265-301.
- CED (2016): “Observaciones finales sobre el informe presentado por Colombia en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. CED/C/COL/CO/1. 27 de octubre de 2016”. [Disponible en: <https://bit.ly/3x9cnhj>]. [Fecha de consulta: 4 de agosto de 2020].

- _____ (2015): “Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. CED/C/MEX/CO/1. 5 de marzo de 2015”. [Disponible en: <https://bit.ly/35F6zjF>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].
- _____ (2014): “Observaciones finales sobre el informe presentado por el Paraguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. CED/C/PRY/CO/1. 20 de octubre de 2014”. [Disponible en: <https://bit.ly/3iZLZCB>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].
- _____ (2013): “Observaciones finales sobre el informe presentado por España en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. CED/C/ESP/CO/1. 12 de diciembre de 2013”. [Disponible en: <https://bit.ly/3xx6hrc>]. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2020].
- _____ (2004): “Observaciones finales sobre el informe presentado por el Paraguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. CED/C/PRY/CO/1. 20 de octubre de 2014”. [Disponible en: <https://bit.ly/3glqBAa>]. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2020].
- CIDH (2014): “Derecho a la verdad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.152 Doc.2. 13 de agosto de 2014”. [Disponible en: <https://bit.ly/3d0LYua>]. [Fecha de consulta: 4 de agosto de 2020].
- CICR (s. f.): “Central Tracing Agency”. [Disponible en: <https://bit.ly/3wObXgn>]. [Fecha de consulta: 5 de agosto de 2020].
- _____ (2014): *Acompañar a los familiares de las personas desaparecidas. Guía práctica* (Ginebra: CICR).
- CICR (2010): “ICRC Central Tracing Agency: Half a Century of Restoring Family Links”. [Disponible en: <https://bit.ly/3wOdenQ>]. [Fecha de consulta: 5 de agosto de 2020].
- _____ (2009a): *Families of Missing Persons in Nepal. A Study of their Needs* (CICR, Kathmandu).
- _____ (2009b): *Guiding Principles/Model Law on the Missing*. Geneva: ICRC
- _____ (2009c): *La gestión de cadáveres en situación de desastre. Guía práctica para equipos de respuesta* (Washington D.C., Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud-CICR-Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja).

- _____ (2009d): *Las personas desaparecidas. Guía para los parlamentarios* (Ginebra, CICR).
- _____ (2009e): *Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e identificación de restos humanos. Guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado y de otras situaciones de violencia armada*. 2ª ed. (Ginebra, CICR).
- _____ (2003a): “28th International Conference of the Red Cross and Red Crescent Geneva, 2-6 December 2003. Declaration Agenda for Humanitarian Action Resolutions”. [Disponible en: <https://bit.ly/2Uli8u1>]. [Fecha de consulta: 5 de agosto de 2020].
- _____ (2003b): *Las personas desaparecidas: Acción para resolver el problema de las personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado o de violencia interna y para ayudar a sus familiares. Informe del CICR: las personas desaparecidas y sus familiares* (Ginebra, ICRC).
- _____ (2003c): “The Missing. The Right to Know. Las personas desaparecidas: acción para resolver el problema de las personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado o de violencia interna y para ayudar a sus familiares”. [Disponible en: <https://bit.ly/3vMCgm3>] [fecha de consulta: 1 de septiembre de 2020].
- Collins, Cath (2016). “Respuestas estatales a la desaparición forzada en Chile: aspectos forenses, policiales y jurídicos”. [Disponible en: <https://bit.ly/3v5rKWl>]. [Fecha de consulta: 18 de enero de 2021].
- Comisión de Derechos Humanos (2006): “Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Estudio sobre el derecho a la verdad. E/CN.4/2006/91. 9 de enero de 2006”. [Disponible en: <https://bit.ly/3zN0jUU>]. [Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020].
- _____ (2005): “Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Impunidad. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. Adición. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. E/CN.4/2005/102/Add.1. 8 de febrero de 2005”. [Disponible en: <https://bit.ly/3zJyb56>]. [Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020].
- _____ (1997): “La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos. Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los

derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. E/CN.4/Sub.2/1997/20. 26 de junio de 1997”. [Disponible en: <https://bit.ly/3gVEIX4>]. [Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020].

Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (2012): “Plan Nacional de Búsqueda”. [Disponible en: <https://bit.ly/35IFbkU>]. [Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020].

Consejo de Derechos Humanos (2020): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. A/HRC/42/40. 30 de julio de 2019”. [Disponible en <https://bit.ly/3djpg0T>]. [Fecha de consulta: 7 de octubre de 2020].

_____ (2017): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de su misión a Albania. A/HRC/36/39/Add.1.18 de julio de 2017”. [Disponible en: <https://bit.ly/3vNPb7d>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].

_____ (2016a): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su misión a Turquía. A/HRC/33/51/Add.1. 27 de julio de 2016”. [Disponible en: <https://bit.ly/35IRM7S>]. [Fecha de consulta: 7 de agosto de 2020].

_____ (2016b): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de su misión a Sri Lanka. A/HRC/33/51/Add.2. 8 de julio de 2016”. [Disponible en: <https://bit.ly/2TW5hOD>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].

_____ (2016c): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su misión al Perú. A/HRC/33/51/Add.3. 8 de julio de 2016”. [Disponible en: <https://bit.ly/3vNMlcG>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].

_____ (2015): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a Croacia. A/HRC/30/38/Add.3. 17 de agosto de 2015”. [Disponible en: <https://bit.ly/3j2fj1I>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].

_____ (2014): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a España. A/HRC/27/49/Add.1. 2 de julio de 2014”. [Disponible en: <https://bit.ly/3wMHS00>]. [Fecha de consulta: 7 de agosto de 2020].

- _____ (2013a): “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Adición. Misión a Turquía. A/HRC/23/47/Add.2. 18 de marzo de 2013”. [Disponible en: <https://bit.ly/3qfjAdn>]. [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2020].
- _____ (2013b): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a Chile. A/HRC/22/45/Add.1. 29 de enero de 2013”. [Disponible en: <https://bit.ly/3xIPJfj>]. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2020].
- _____ (2013c): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. A/HRC/22/45. 28 de enero de 2013”, [Disponible en: <https://bit.ly/35IS4eY>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].
- _____ (2012): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión al Congo. A/HRC/19/58/Add.3. 20 de enero de 2012”. [Disponible en: <https://bit.ly/3vLSfAA>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].
- _____ (2011a): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias Adición. Misión a México. A/HRC/19/58/Add.2. 20 de diciembre de 2011”. [Disponible en: <https://bit.ly/3cZYURo>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].
- _____ (2011b): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. A/HRC/16/48. 26 de enero de 2011”, [Disponible en: <https://bit.ly/3vMEf9Z>]. [Fecha de consulta: 4 de agosto de 2020].
- _____ (2010a): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a Bosnia y Herzegovina. A/HRC/16/48/Add.1. 28 de diciembre de 2010”. [Disponible en: <https://bit.ly/3zNqElG>]. [Fecha de consulta: 7 de octubre de 2020].
- _____ (2010b): “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a Marruecos. A/HRC/13/31/Add.1. 9 de febrero de 2010”. [Disponible en: <https://bit.ly/3glt1ie>]. [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2020].
- _____ (2009): “Promoción y Protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Grupo de

Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a la Argentina. A/HRC/10/9/Add.1. 5 de enero de 2009". [Disponible en: <https://bit.ly/3vNO8nw>]. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020].

_____ (2007a): "Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a El Salvador. A/HRC/7/2/Add.2. 26 de octubre de 2007". [Disponible en: <https://bit.ly/3gUE72r>]. [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2020].

_____ (2007b): "Aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos Humanos". Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a Guatemala. A/HRC/4/41/Add.1. 20 de febrero de 2007". [Disponible en: <https://bit.ly/2Sln95k>]. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2020].

Cordner, Stephen y McKelvie, Helen (2002): "Developing Standards in International Forensic Work to Identify Missing Persons", en *International Review of the Red Cross* (Vol. 84, N° 848), pp. 867-884.

Cordner, Stephen y Tidball-Binz, Morris (2017): "Humanitarian Forensic Action-Its Origins and Future", en *Forensic Science International* (Vol. 279), pp. 65-71.

Crettol, Monique; Milner, Lina; La Rosa, Anne-Marie y Stockwell, Jill (2017): "Establishing Mechanisms to Clarify the Fate and Whereabouts of Missing Persons", en *International Review of the Red Cross* (N° 905), pp. 589-618.

Doretti, Mercedes y Burrell, Jennifer (2007): "Gray Spaces and Endless Negotiations: Forensic Anthropology and Human Rights", en Field, Les W. y Richard G. Fox (eds.). *Anthropology Put to Work* (Oxford, Berg), pp. 45-64.

Doretti, Mercedes y Fondebrider, Luis (2001): "Science and human rights. Truth, justice, reparation and reconciliation, a long way in Third World countries", en Buchli, Victor y Lucas, Gavin (eds). *Archaeologies of the Contemporary Past* (London-New York, Routledge), pp. 138-143.

- Drawdy, Shuala M. y Katzmarzyk, Cherly (2016): "The Missing Files: The Experience of the International Committee of the Red Cross" en Congram, Derek (ed.). *Missing Persons. Multidisciplinary Perspectives on the Disappeared* (Toronto: Canadian Scholars' Press), pp. 60-73.
- Dulitzky, Ariel y Anayanssi Orizaga, Isabel (2019): *¿Dónde están? Estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente* (London, International Bar Association).
- Fowler, Gillian y Thompson, Tim (2017): "¿Un mero ejercicio técnico?: desafíos y soluciones tecnológicas para la identificación de personas en escenarios de fosas comunes en un contexto moderno", en Garibian, Sévane, Anstett, Élisabeth, Dreyfus, Jean Marc (dirs.), *Restos humanos e identificación. Violencia de masa, genocidio y el "giro forense"* (Buenos Aires, Miño y Dávila), pp. 115-134.
- Gaggioli, Gloria (2018): "International Humanitarian Law: The legal framework for humanitarian forensic action", en *Forensic Science International* (Vol. 282), pp. 184-194.
- Garibian, Sévane (2013): "Buscar a los muertos entre los vivos: dar cuerpo a los desaparecidos de la dictadura argentina por el Derecho", en Anstett, Élisabeth, Dreyfus, Jean-Marc y Garibian, Sévane (dirs.), *Cadáveres impensables, cadáveres impensados. El tratamiento de los cuerpos en las violencias de masa y los genocidios* (Buenos Aires, Miño y Dávila), pp. 29-39.
- Garibian, Sévane; Anstett, Élisabeth y Dreyfus, Jean Marc (2017): "Introducción: ¿Por qué exhumar? ¿Por qué identificar?", en Garibian, Sévane, Anstett, Élisabeth, Dreyfus, Jean Marc (dirs.), *Restos humanos e identificación. Violencia de masa, genocidio y el "giro forense"* (Buenos Aires, Miño y Dávila), pp. 9-20.
- GTDFI (2011): "Comentario General sobre el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas". [Disponible en: <https://bit.ly/3zMpAyr>]. [Fecha de consulta: 5 de agosto de 2020].
- Henckaerts, Jean-Marie y Doswald Beck, Louise (2009): *Customary International Humanitarian Law. Volume I: Rules*. Reimpresión con correcciones (ICRC-Cambridge University Press, Cambridge).

- Jinks, Derek (2015): “International Human Rights Law in Time of Armed Conflict”, en Chapham, Andrew y Gaeta, Paola (eds.), *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict* (Oxford, Oxford University Press), pp. 656-674.
- Jugo, Admir y Wastell, Sari (2017): “desensamblar los pedazos, ensamblar los social: las vidas forenses y políticas de las fosas comunes y secundarias en Bosnia y el Herzegovina”, en Garibian, Sévane, Anstett, Élizabeth, Dreyfus, Jean Marc (dirs.), *Restos humanos e identificación. Violencia de masa, genocidio y el “giro forense”* (Buenos Aires, Miño y Dávila), pp. 135-162.
- Kleffner, Jann K. (2008): “Protection of the Wonder, Sick and Shipwrecked”, en Fleck, Dieter, *The Handbook of International Humanitarian Law*. 2ª ed. (Oxford, Oxford University Press), pp. 325-365.
- Klinkner, Melanie (2017): “Towards Mass-Grave Protection Guidelines”, *Human Remains and Violence* (Vol. 3, N° 1), pp. 52-70.
- Londoño, Ximena y Ortiz Signoret, Alexandra (2017): “Implementing International law: An Avenue for Preventing Disappearances, Resolving Cases of Missing Persons and Addressing the Needs of their Families”, en *International Review of the Red Cross* (N° 905), pp. 547-567.
- Martin, Sophie (2002): “The Missing”, en *International Review of the Red Cross* (Vol. 84, N° 848), pp. 723-726.
- Milanovic, Marko (2014): “The Lost Origins of Lex Specialis: Rethinking the Relationship between Human Rights and International Humanitarian Law”. [Disponible en: <https://bit.ly/3w355LU>]. [Fecha de consulta: 25 de enero de 2021].
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Perú (2017): “Plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas (1980-2000)”. [Disponible: <https://bit.ly/3gP2BdK>]. [Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020].
- Navarro, Susana; Pérez Sales, Pau y Kernjak, Franc (2010): “Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales”. [Disponible en: <https://bit.ly/2TaIb6v>]. [Fecha de consulta: 5 de agosto de 2020].

- Nesiah, Vasuki (2002): "Overcoming Tensions between Family and Judicial Procedures", en *International Review of the Red Cross* (Vol. 84, N° 848), pp. 823-844.
- Pearlman, Adam. R. (2008): "Digging for Truth, Justice, or the Humanitarian Way: Priorities in Post-Genocide Transitional Justice and Exhumations of Mass Graves", [Disponible en: <https://bit.ly/34ZTbX4>]. [Fecha de consulta: 27 de mayo de 2020].
- Reátegui, Félix; Barrantes, Rafael y Peña, Jesús (2012): *Desaparición forzada y derechos de las víctimas. La respuesta humanitaria a las demandas de verdad, justicia y reparación en el Perú* (Lima, IDEHPUCP, Fundación Konrad Adenauer).
- Robins, Simon (2014): *Families of the Missings*. (New York, Routledge).
- Rodley, Nigel y Pollard, Matt (2009): *The Treatment of Prisoners under International Law*. 3ª ed. (Oxford, Oxford University Press).
- Rosenblat, Adam (2019): "The Danger of a Single Story about Forensic Humanitarianism", en *Journal of Forensic and Legal Medicine* (Vol. 61), pp. 75-77.
- _____ (2015): *Digging for the Disappeared. Forensic Science after Atrocity* (Stanford, Stanford University Press).
- Salado Puerto, Mercedes y Tuller, Hugh (2017): "Large-scale Forensic Investigations into the Missing: Challenges and Considerations", en *Forensic Science International* (Vol. 279), pp. 219-228.
- Sarkin, Jeremy (2012): "Why the Prohibition of Enforced Disappearance Has Attained *Jus Cogens* Status in International Law", en *Nordic Journal of International Law* (Vol. 81 N° 4), pp. 537-584.
- Sassòli, Marco (2020): "International Humanitarian Law and International Human Rights Law", en Saul, Ben y Akande, Dapo (eds.). *The Oxford Guide to International Humanitarian Law* (Oxford, Oxford University Press), pp. 381-402.
- Sassòli, Marco y Tougas, Marie-Louise (2002): "The ICRC and the Missing", en *International Review of the Red Cross* (Vol. 84, N° 848), pp. 727-750.

Sivakumaran, Sandesh (2014): “International Humanitarian Law”, en Moeckli, Daniel, et al. (eds.), *International Human Rights Law*. 2ª ed. (Oxford, Oxford University Press), pp. 503-520.

Stover, Eric y Shigekane, Rachel (2004): “Exhumation of Mass Graves: Balancing Legal and Humanitarian Needs” en Stover, Eric y Weinstein, Harvey M. (eds.), *My Neighbor, My Enemy. Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity* (Cambridge, Cambridge University Press), pp. 85-103.

Stover, Eric y Shigekane, Rachel (2002): “The Missing in the Aftermath of War: When do the Needs of Victims’ Families and International War Crimes Tribunals Clash”, en *International Review of the Red Cross* (Vol. 84, N° 848), pp. 845-866.

Taccoen, Marc (2013): “Cuerpos y violencia de masa: las informaciones que pueden proveer los profesionales de la medicina legal”, en Anstett, Élisabeth, Dreyfus, Jean-Marc y Garibian, Sévane (dirs.), *Cadáveres impensables, cadáveres impensados. El tratamiento de los cuerpos en las violencias de masa y los genocidios* (Buenos Aires, Miño y Dávila), pp. 51-57.

Tuller, Hugh (2015): “Identification versus Prosecution”, en Crossland, Zoë y Joyce, Rosemary A. (eds.), *Disturbing Bodies. Perspectives on Forensic Anthropology* (Santa Fe, SAR Press), pp. 85-101.

Zellweger-Monin, Renée (2007): “Addressing the Phenomenon of Missing Persons: a Major Challenge in International Law and Practice”. [Disponible en: <https://bit.ly/3w4fQgR>]. [Fecha de consulta: 27 de mayo de 2020].

Normas jurídicas citadas

I Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (CGI), Ginebra, 12 de abril a 12 de agosto de 1949.

II Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (CGII), Ginebra, 12 de abril a 12 de agosto de 1949.

III Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (CGIII), Ginebra, 12 de abril a 12 de agosto de 1949.

IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (CGIV), Ginebra, 12 de abril a 12 de agosto de 1949.

AG OEA (2018): *Promoción y protección de derechos humanos*. AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18). 5 de junio de 2018.

AG OEA (2016): *Promoción y protección de derechos humanos*. AG/RES. 2887 (XLVI-O/16). 14 de junio de 2016.

AG OEA (2014): *Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares*. AG/RES. 2864 (XLIV-O/14), 5 de junio de 2014.

AG OEA (2013): *Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares*. AG/RES. 2794 (XLIII-O/13). 5 de junio de 2013.

AG OEA (2012): *Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares*. AG/RES. 2717 (XLII-O/12). 4 de junio de 2012.

AG OEA (2011): *Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares*. AG/RES. 2651 (XLI-O/11). 7 de junio de 2011.

AG OEA (2010): *Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares*. AG/RES. 2594 (XL-O/10), 8 de junio de 2010.

AG OEA (2009): *Persons who have disappeared and assistance to members of their families*. AG/RES. 2513 (XXXIX-O/09). 4 de junio de 2009.

AG OEA (2008): *Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares*. AG/RES. 2416 (XXXVIII-O/08). 3 de junio de 2008.

AG OEA (2007): *Persons who have disappeared and assistance to members of their families*. AG/RES. 2295 (XXXVII-O/07). 5 de junio de 2007.

AG OEA (2005): *Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares*. AG/RES. 2134 (XXXV-O/05). 7 de junio de 2005.

Asamblea General de la ONU (2005): *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, resolución 60/147, 16 de diciembre de 2005.

Asamblea General de la ONU (1992): *Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992.

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994.

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. [Disponible en: <https://bit.ly/3g085mH>]. [Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2020].

Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2019). CED/C/7. CED. 8 de mayo de 2019.

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (PAI), 8 de junio de 1977.

Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), ACNUDH, Nueva York, HR/PUB/17/4.

Jurisprudencia citada

Corte IDH: *Garrido y Baigorria Vs. Argentina* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 30 de agosto de 2017.

Corte IDH: *Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de febrero de 2017.

Corte IDH: *Vereda La Esperanza Vs. Colombia* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 341, de 31 de agosto de 2017.

Corte IDH: *Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 328, de 30 de noviembre de 2016

Corte IDH: *Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 299, de 1 de septiembre de 2015.

Corte IDH: *Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador* (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 285, de 14 de octubre de 2014.

Corte IDH: *Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 287, de 14 de noviembre de 2014.

Corte IDH: *Gómez Palomino Vs. Perú* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 13 de febrero de 2013.

Corte IDH: *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 14 de mayo de 2013.

Corte IDH: *Osorio Rivera y familiares Vs. Perú* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No. 274, de 26 de noviembre de 2013.

Corte IDH: *Radilla Pacheco Vs. México* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 14 de mayo de 2013

Corte IDH: *Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 27 de febrero de 2012.

Corte IDH: *Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala* (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 253, de 20 de noviembre de 2012.

Corte IDH: *Masacres de Río Negro Vs. Guatemala* (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 250, de 4 de septiembre de 2012.

Corte IDH: *Blanco Romero y otros Vs. Venezuela* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 22 de noviembre de 2011.

Corte IDH: *Contreras y otros Vs. El Salvador* (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C Nº 232, de 31 de agosto de 2011.

Corte IDH: *Gómez Palomino Vs. Perú* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 5 de julio de 2011.

Corte IDH: *Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia* (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 217, de 1 de septiembre de 2010.

Corte IDH: *19 Comerciantes Vs. Colombia* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 8 de julio de 2009.

Corte IDH: *Caracazo Vs. Venezuela* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 23 de septiembre de 2009.

Corte IDH: *Anzualdo Castro vs. Perú* (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 202, de 22 de septiembre de 2009.

Corte IDH: *González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México* (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C Nº 205, de 16 de noviembre de 2009.

Corte IDH: *Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 9 de julio de 2009.

Corte IDH: *Trujillo Oroza Vs. Bolivia* (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia), de 16 de noviembre de 2009.

Corte IDH: *Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia* (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 191, de 27 de noviembre de 2008.

Corte IDH: *Tiu Tojín Vs. Guatemala* (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 190, de 26 de noviembre de 2008.

Corte IDH: *Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia* (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 140, de 31 de enero de 2006.

Corte IDH: *Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador* (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 120, de 1 de marzo de 2005.

Corte IDH: *Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador* (Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 131, de 9 de septiembre de 2005.

Corte IDH: *19 Comerciantes Vs. Colombia* (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 109, de 5 de julio de 2004.

Corte IDH: *Molina Theissen Vs. Guatemala* (Reparaciones y Costas), Serie C No. 108, de 3 de julio de 2004.

Corte IDH: *Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras* (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 99, de 7 de junio de 2003.

Corte IDH: *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala* (Reparaciones y Costas), Serie C No. 91, de 22 de febrero de 2002.

Corte IDH: *Trujillo Oroza Vs. Bolivia* (Reparaciones y Costas), Serie C No. 92, de 27 de febrero de 2002.

Corte IDH: *Durand y Ugarte Vs. Perú* (Reparaciones y Costas), Serie C No. 89, de 3 de diciembre de 2001.

Corte IDH: *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala* (Fondo), Serie C No. 70, de 25 de noviembre de 2000.

Corte IDH: *Durand y Ugarte vs. Perú* (Fondo), Serie C Nº 68, de 16 de agosto de 2000.

CIDH: *Ignacio Ellacuría, S.J.; Segundo Montes, S.J.; Armando López, S.J.; Ignacio Martín Baró, S.J.; Joaquín López y López, S.J.; Juan Ramón Moreno, S.J.; Julia Elba Ramos; y Celina Mariceth Ramos, El Salvador* (Informe No. 136/99, Caso 10.488) de 22 de diciembre de 1999.